



LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Por favor, sólo imprima este documento si es absolutamente necesario.

PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Deán Funes 94 - Tel. 0351 - 4203400

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

6º REUNIÓN

4º SESIÓN ORDINARIA

18 de febrero de 2015



- Documento Oficial provisto por el Cuerpo de Taquígrafos.
- Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.

–En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de febrero de 2015, siendo la hora 16 y 07:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro abierta la 4ª sesión ordinaria del 137º período legislativo.

Invito al señor legislador Alfredo Altamirano a izar a media asta la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Altamirano procede a izar la Bandera Nacional a media asta en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Previo a ingresar al desarrollo de la sesión vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas fallecidas en el trágico temporal que afectó a las localidades de Sierras Chicas.

Invito a los señores legisladores y al público presente a ponernos de pie.

–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.

-3-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.

Solicito que se incluya al legislador Pedro Schiavoni como coautor del expediente 16192.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Liliana Montero como coautora del proyecto 16172.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a proceder a dar lectura a la nota elevada por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical para reasignar a los miembros titular y suplente por la minoría en la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 12 de febrero de 2015.

Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi condición de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y en razón del carácter de primera minoría que le fuera reconocido a nuestra bancada por la Legislatura provincial en la sesión del 4 de febrero del corriente año, tengo el agrado de dirigirme a la señora Vicegobernadora con la finalidad de postular a los legisladores Anselmo Bruno como titular, y al suscripto como suplente, para integrar la Comisión de Calificación y Selección que asiste al Poder Ejecutivo en la designación de los jueces de paz, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º, inciso d), de la Ley 9449 y el artículo 169 de la Constitución provincial; solicitándole quiera tener a bien disponer el trámite parlamentario correspondiente para formalizar su designación.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Por tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la señora Vicegobernadora con mi mayor consideración y estima.

Rodrigo Alfredo De Loredó
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredó.

Sr. De Loredó.- Gracias, señor presidente.

Quiero hacer una salvedad, en función de las facultades de las que dispone este Pleno: solicito a la Presidencia se nos permita modificar el nombre de la persona sugerida como integrante suplente y proponer a la legisladora Amalia Vagni en su lugar, ratificando para el cargo de titular al legislador Anselmo Bruno.

Sr. Presidente (González).- En consideración la sugerencia formulada por el bloque de la Unión Cívica Radical proponiendo a los legisladores Bruno y Vagni, como titular y suplente respectivamente, para integrar la Junta de Calificación y Selección de los Jueces de Paz.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 103 al 110 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5ª sesión ordinaria del 137º período legislativo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 103 al 110 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 5ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 3, 50 y 51 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 6ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3, 50 y 51 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 6ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.

Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4 al 49 y 52 al 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4 al 49 y 52 al 102 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 7ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyectos de declaración 16181, 16183, 16184, 16189 al 16193, 16195.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de los expedientes: 15971 pliego solicitando acuerdo para designar al abogado Sebastián López Peña como

Vocal del Superior Tribunal de Justicia, y 15972 pliego solicitando acuerdo para designar al abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de los pliegos 16082 y 16083 solicitando acuerdo para designar a Vocales de la Cámara del Trabajo en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 18 de febrero de 2015.

Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S. / D

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas de los pliegos 15971/P714 y 15972/P/14, por los que se solicita acuerdo para designar al abogado Sebastián Cruz López Peña como Vocal del Tribunal Superior de Justicia y al abogado Pablo Bustos Fierro como Fiscal General Adjunto.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los pliegos y solicitudes de acuerdo para nombramientos en el Poder Judicial serán tratados en conjunto con votación por separado de cada uno de ellos.

Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: tenemos bajo tratamiento los pliegos 15971 y 15972, ambos del año 2014.

En sendos casos el Poder Ejecutivo solicita que prestemos un acuerdo. En el primero, para designar al abogado Sebastián Cruz López Peña como Vocal Titular del Tribunal Superior de Justicia, y en el segundo para designar al doctor Pablo Alfredo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba.

El Poder Ejecutivo cuenta entre sus atribuciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144, inciso 9) de la Constitución provincial, la de designar, previo acuerdo del Poder Legislativo, a los miembros del Tribunal Superior, jueces inferiores y miembros del Ministerio Público Fiscal.

Conforme la misma norma constitucional, este Poder tiene la atribución, de acuerdo al artículo 104, inciso 42), de prestar acuerdo o no a los pliegos enviados a la Legislatura.

Este proceso se realizaba según lo establecido por la Constitución de la Provincia, pero luego se aprobaron otras normas -como la Ley 9003 de Audiencias Públicas, sus sucesivas modificaciones, como también el Decreto 3 del año 2004-, que fijaron la incorporación al sistema de los miembros del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General, establecieron la necesidad de que el Poder Ejecutivo dé a publicidad quiénes son las personas que van a ocupar tan relevante puesto dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal; fijaron un lapso de 15 días para que todos aquellos interesados, ya sean particulares u organizaciones sociales, jurídicas, etcétera, se puedan expresar sobre las cualidades técnicas y éticas de los postulantes, y luego determinaron la necesidad de hacer una Audiencia Pública en la Legislatura de Córdoba.

Esto se llevó adelante, hay decenas de instituciones, organizaciones y particulares que representan a distintos estratos de nuestra sociedad: la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional, universidades privadas, Asociación de Magistrados, Colegio de Abogados, fiscales, jueces, camaristas, que de manera individual han hecho llegar sus adhesiones como instituciones tanto al Ministerio de Justicia, en su momento, como a esta Legislatura a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La semana pasada, el día jueves, nosotros realizamos una Audiencia Pública con gran participación de los distintos sectores que acabo de mencionar: mucha gente de la Justicia Federal, universidades públicas, privadas, la Academia Nacional de Derecho, la Bolsa de Comercio, abogados particulares, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, etcétera, en la cual se manifestaron a favor de la designación de ambos postulantes por diversos motivos que constan en la versión taquigráfica que se realizó el día de la fecha.

Con posterioridad, entrevistamos a ambos postulantes poniéndolos en conocimiento de aquellas manifestaciones tanto positivas, como también de algún cuestionamiento que pudiera haber a alguna de las designaciones, ante lo cual respondieron a todas las preguntas que en el momento se les realizaron.

Ahora, ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos al postulante al Tribunal Superior de Justicia, doctor Sebastián Cruz López Peña? Estamos hablando de una persona joven, de 40 años, que cumple con los requisitos del artículo 158 de la Constitución Provincial y sus concordantes, abogado recibido en la Universidad Católica de Córdoba, especialista en Derecho Penal recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado y doctorando -es decir que todavía no concluye su doctorado pero está en marcha- en la Universidad Complutense de Madrid, como así también en el Instituto Ortega y Gasset; ha tenido premios y distinciones como, por ejemplo, la de ser joven sobresaliente, en el año 2007, otorgado por la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba, luego de que lo eligiera un prestigioso jurado; ha dictado numerosas conferencias en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Colegio de Abogados, en la Universidad Católica, en la Universidad Blas Pascal, etcétera; tiene numerosas publicaciones en distintos medios y respecto de distintas temáticas.

Respecto de sus actividades académicas -que me parece un detalle muy importante para ver el perfil del postulante-, nosotros vamos a ver que en toda su actividad académica en las diversas universidades donde se desempeña tiene una especialización, no solamente en Derecho Penal sino

también en Derecho Tributario y en Derecho Penal y Económico. Digo esto porque no es común que un máximo órgano como el Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema de Justicia puedan disponer de una persona especialista en Derecho Penal pero, sobre todo, sea especialista en Derecho Penal Económico y Tributario. Es así que él da clases de Derecho Penal como miembro titular de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica, es profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, donde dicta Derecho Penal I, Finanzas y Derecho Tributario; es profesor titular en la Universidad Blas Pascal; dicta Derecho Penal Económico en la Universidad Empresarial Siglo XXI, y dicta Derecho Penal II en la Universidad Nacional de Córdoba. Como puede observarse, da clases sobre Derecho Penal, Derecho Penal Económico y Derecho Tributario en diversas universidades públicas y privadas.

Su tarea como abogado ha sido plural, en ejercicio de la matrícula; fue Director de Política Judicial y Reforma Procesal en el Ministerio de Justicia; fue Director General de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro; fue Fiscal “ad hoc” en la Fiscalía General del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Córdoba. Asimismo, es una persona que participó activamente en la tarea –no menor– de reforma del Código Penal, reflejando muchas de sus ideas en la redacción final de varios de sus artículos.

Esta es una breve síntesis de sus antecedentes, logros y distinciones, de su actividad profesional y académica, así como de sus publicaciones, haciendo hincapié en su especial orientación, ya que Córdoba será una de las pocas provincias que dispondrá de un especialista en Derecho Penal Económico en su máximo Tribunal.

Por su parte, el doctor Bustos Fierro, propuesto como Fiscal General Adjunto, cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 173 de la Constitución provincial –y sus concordantes, como el artículo 158– y en los artículos 6º y 7º de la Ley 7826.

Es un abogado de 52 años de edad, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba; realizó distintas diplomaturas en la Universidad Empresarial Siglo XXI y diversos cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba; tiene una variada actividad académica, siendo profesor de Derecho Procesal Penal y de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Con relación a su perfil profesional, debo destacar que se trata de una persona que, por su actividad académica, conoce mucho en materia de lucha contra el narcotráfico y, por su actividad laboral, sabe mucho sobre Derechos Humanos. En tal sentido, fue docente a cargo de la asignatura Legislación Civil y Penal sobre Estupefacientes, así como del curso de capacitación “Lucha contra el Narcotráfico”, dictados en la Escuela de Investigación del Crimen, perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba.

El doctor Bustos Fierro dictó distintos cursos en diversas organizaciones, como los que fueran organizados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y por el Tribunal Superior de Justicia en el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo Núñez”; brindó disertaciones en el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, etcétera.

Asimismo, recibió numerosas menciones y distinciones –Reconocimiento Académico, en el año 2001; Mención Académica, en 2003; Distinción Académica, en 2009– de parte de la Universidad Nacional de Córdoba, y es miembro activo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.

Estos antecedentes evidencian, señor presidente, que el doctor Bustos Fierro conoce mucho en materia de lucha contra el narcotráfico y de Derechos Humanos. Esto es muy importante puesto que sus antecedentes laborales señalan que comenzó a trabajar en Tribunales Federales en el año 1984, en el menor de sus cargos; después, fue avanzando, ocupando sucesivamente distintos cargos, como el de Prosecretario Administrativo y de Secretario Relator de la Cámara Federal en el año 1996; actualmente se desempeña como Secretario de la Cámara de Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba a partir del año 2008.

Desde allí ha llevado adelante una tarea importante -no lo digo yo, ya vamos a analizar la Audiencia Pública- en los históricos juicios de Derechos Humanos, no sólo conocidos en Córdoba y en la

República Argentina sino que han sido un modelo y ejemplo a nivel internacional. Además, ha tenido publicaciones y participaciones en publicaciones sobre numerosos temas y en diversos medios de comunicación, sobre todo gráficos.

Esta apretada síntesis, señor presidente, habla de las calidades técnicas que tienen ambos: el postulante al Tribunal Superior de Justicia porque realmente nos va a enriquecer que forme parte del mismo, y el postulante a la Fiscalía General por sus conocimientos en la lucha contra el narcotráfico y en Derechos Humanos.

En la Audiencia Pública también se habló de las características técnicas de los postulantes que todos ponderaron, pero voy a rescatar, en el caso del postulante López Peña al Tribunal Superior de Justicia, dos cosas que hablan de una persona de bien. Vinieron a la Audiencia Pública los fiscales federales que fueron adversarios de López Peña en numerosos procesos judiciales, es decir, fueron contendientes; estas personas, que fueron rivales jurídicos del doctor López Peña, destacaron no solamente sus cualidades técnicas sino el conocimiento de que era, además, una buena persona.

Por otro lado, señor presidente, dentro de aquellas adhesiones que llegaron desde toda la Provincia, de instituciones públicas, privadas, de la Justicia, de organizaciones intermedias y de abogados particulares, quiero destacar una de alguien que no pudo venir a la Audiencia Pública pero que me parece digna de la importancia de la persona que estamos designando en el Tribunal de Justicia, me refiero al doctor Enrique Bacigalupo. El doctor Bacigalupo es ex magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España, o sea que fue miembro del máximo órgano judicial de ese país. Hoy, en proceso de jubilación, retomó su matrícula y es una persona tan apreciada en España que en el ejercicio de su profesión sólo tiene un cliente y es argentino: Lionel Messi; no lo buscó porque fuera una persona que no supiera defenderlo.

Se conocieron con López Peña en la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto Ortega y Gasset; trabajaron juntos y desde allí nos envía, recordando aquellas viejas jornadas de trabajo, la apreciación ética, moral y profesional del doctor López Peña.

En el caso del doctor Bustos Fierro, además de que todos ponderaron su tarea en los juicios por los delitos de lesa humanidad contra los Derechos Humanos, no lo dicen solamente aquellos que forman parte del Poder Judicial Federal, sino que vino un reconocido abogado representante de las causas de derechos humanos, el doctor Orosz, quien tuvo apreciaciones de una gran consideración y alta estima hacia el doctor Bustos Fierro. Además, nos llegó por carta una ponderación hacia su persona para este cargo por parte del Director de Derechos Humanos de la República Argentina, doctor Martín Fresneda.

Por esto, señor presidente, considerando que son personas que nos van a honrar desde el punto de vista técnico y que, además, van a ser personas de bien en la función pública como servidores públicos, pedimos al Pleno de este Cuerpo apruebe los pliegos bajo tratamiento enviados por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredó.

Sr. De Loredó.- Señor presidente: quiero fundamentar el voto positivo que el radicalismo va a otorgar a la designación de los señores Pablo Bustos Fierro y Sebastián López Peña.

Definitivamente observamos que se dan por cumplimentados los requisitos formales, establecidos tanto por nuestra Constitución como por la legislación vigente. En igual sentido, interpretamos que en la Audiencia Pública, cumplimentada en tiempo y forma, no expresaron ninguna circunstancia fáctica que exhibiera obstáculos legales para la designación de los dos postulados por el Gobernador de la Provincia.

Lo que sí quiere dejar sentado el radicalismo en el Diario de Sesiones son dos observaciones. La primera y principal es una cuestión de oportunidad. La verdad es que interpretamos que los argentinos estamos atravesando un proceso de intranquilidad, de trascendencia histórica e institucional que afecta e involucra al Poder Judicial de la Nación y con ello a los poderes judiciales de todas las provincias; por

eso interpretamos que esta no era la oportunidad para obtener juicios más serenos y reflexivos a la hora de designar tan importantes cargos, de semejante jerarquía, en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Y en el caso particular del postulante para integrar en el Tribunal Superior de Justicia, el abogado penalista Sebastián López Peña, no queremos dejar de señalar, como dato no menor de su currículo, que fue integrante y participó de las gestiones de quienes ahora lo proponen para integrar el Tribunal Superior de Justicia, lo que nos obliga, tanto a los actores políticos opositores como oficialistas, a tener un especial cuidado y celo en el juicio de ecuanimidad que vaya a tener el doctor Sebastián López Peña en el cargo, lógicamente haciendo reservas por parte del radicalismo de las facultades de las que disponemos, autorizadas por nuestra Constitución, para señalar, cada vez que creamos pertinente u oportuno, un comportamiento que no se corresponda con la equidad y ecuanimidad que tiene que tener un cargo de semejante envergadura y jerarquía institucional.

Hechas esas dos observaciones de criterios de oportunidad y una especie de llamamiento, observación o sugerencia que hace el bloque del radicalismo, interpretamos que los requisitos formales están correctamente cumplimentados, razón por la cual la Unión Cívica Radical vota favorablemente los dos pliegos que de forma común estamos sometiendo a votación por este Cuerpo.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco y atendiendo el tratamiento de los pliegos en discusión quiero manifestar, respecto del pliego del doctor López Peña que, atento a los antecedentes académicos y jurídicos manifestados por el mismo y después de una aclaración que personalmente hice en la Audiencia Pública, donde cuestioné el valor de una propiedad y estaba aclarada en el pliego que fue remitido a esta Legislatura, consideramos que reúne las condiciones necesarias para formar parte del Tribunal de Justicia. En consecuencia, vamos a prestar el acuerdo solicitado.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico, en relación al pliego que postula al doctor Pablo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto de esta Provincia, vamos a solicitarle a la Legislatura que nos autorice a abstenernos en la votación por las razones que vamos a manifestar.

Hemos evaluado los antecedentes del doctor Pablo Bustos Fierro, hemos participado en la Audiencia Pública y hemos escuchado el desarrollo y el desempeño del doctor Bustos Fierro en la entrevista realizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y nos parece que, desde ese punto de vista, el mismo cumple los requisitos exigidos por la ley para acceder al cargo para el que se lo postula.

Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación, nuestro desacuerdo con el momento puntual, preciso, arbitrario y especulativo en el que el Gobernador de la Provincia manda este pliego, a los pocos días de que hubo ingresado a la Justicia Federal una denuncia que lo involucra y que recae, precisamente, en el Juzgado Federal a cargo del padre del doctor Pablo Bustos Fierro, por lo cual nos parece institucionalmente una jugada baja que pretende o, al menos, eso parece decirnos la lectura de la realidad, condicionar la actividad del juez Bustos Fierro.

Por otra parte, flaco favor le ha hecho el Gobernador de la Provincia a alguien que reúne, según han expresado sus colegas y el Colegio de Abogados, las condiciones para ejercer un cargo tan importante, pero no puede estar desvinculado este pliego de la situación política que el Gobernador de la Provincia estaba atravesando cuando lo envió a la Legislatura. No es que lo mandó hace un año y lo estamos tratando ahora; lo hizo a los pocos días de haber ingresado una denuncia que lo involucra.

Por lo tanto, la responsabilidad política y ética nos hace dudar no –y que quede claro- de las calidades y cualidades del doctor Pablo Bustos Fierro sino del oportunismo especulativo del Gobernador de la Provincia al mandar este pliego.

En ese sentido y por las razones expresadas, solicitamos que se nos permita la abstención en la votación.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar la aprobación de los pliegos de los doctores que han sido propuestos, ya que entendemos que han cumplido con los requisitos necesarios.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: tenemos en tratamiento los pliegos de los doctores Bustos Fierro y López Peña, dos designaciones que son de altísima trascendencia institucional para la Provincia de Córdoba a partir de la importancia de la jerarquía que tiene el organigrama de uno de los Poderes del Estado de la Provincia de Córdoba.

Siempre han sido motivo de discusión –discusión, si se quiere, en este caso acotada- los mecanismos de nombramiento de los jueces, no solamente en nuestro país sino también en todo lo que significa el mundo occidental.

Nosotros tenemos un sistema previsto por la Constitución de la Provincia de Córdoba en el artículo 144, inciso 9), que forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero también hay otros sistemas de elección de los jueces de la Corte.

Si uno se toma el trabajo de repasar un poco el Derecho Comparado, advertirá que son muy variopintos los mecanismos de designación y remoción de los jueces que integran las cortes nacionales o provinciales. Hay lugares donde el mecanismo es una designación exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, mientras que en otros lugares del mundo, como por ejemplo Gran Bretaña, hay una comisión especial para designar a los jueces de la Corte, o sistemas mixtos como ocurre en la República Argentina y en la Provincia de Córdoba, donde forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo con la participación –prestando acuerdo- de las legislaturas provinciales o el Congreso de la Nación, o bien hay otros donde directamente no interviene el poder político sino que es una decisión o potestad sujeta al voto popular, tal cual ocurre en la hermana República de Bolivia.

Particularmente, soy de los que creen que la Provincia necesita una reforma constitucional; ya lo hemos planteado años atrás, cuando colectivamente y durante mucho tiempo esta Unicameral discutió y aprobó la reforma política de la Provincia de Córdoba, planteando desde esos momentos que era necesario dar otra vuelta de tuerca en el “traje” institucional de la Provincia y discutir sobre la reforma constitucional que creemos absolutamente necesaria y en cuyo caso, entiendo, no debiera quedar afuera la discusión sobre si mantenemos o modificamos el actual mecanismo de designación de integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.

Mientras tanto, las aptitudes exigidas van por el derrotero de lugares comunes que tienen que ver con que los integrantes preseleccionados tengan su buen nombre y honor, que haya una correcta valoración de sus aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, trayectoria y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y los valores democráticos, etcétera.

De todos modos, creo que falta una ponderación que tiene que ver con algo absolutamente necesario como es la debida independencia del poder político y de las corporaciones económicas. En ese terreno –que ya no sería harina de este costal porque quizás excede el marco de lo que determina el derrotero del procedimiento de la Constitución de la Provincia de Córdoba- algunos de estos integrantes, particularmente uno de ellos, el doctor López Peña, dejaría bastante que desear al menos en lo que tiene que ver con la debida independencia del poder político y particularmente del actual Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Pero objetivamente, presidente, no puedo escaparme al marco que rige el actual sistema de elección determinado por nuestra Carta Magna, y la verdad es que ambos postulantes cumplen con los requisitos formales, sorteando airoosamente los mecanismos participativos previstos en nuestras leyes provinciales como es el caso de la Audiencia Pública, en la que algunas objeciones me parece que no alcanzan a perturbar o disminuir las prestaciones de estos postulantes, razón por la cual me permito recomendar a la Legislatura –y en ese sentido acompaño con mi voto positivo- prestar acuerdo para la designación de ambos postulantes.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (González). - Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio. - Señor presidente, en una Provincia sin controles nos disponemos a seguir despilfarrando controles. Me estoy refiriendo a la designación del doctor López Peña para el Superior Tribunal de Justicia.

Digo “en una Provincia sin controles” porque su órgano máximo de control, que es la Legislatura, se ha transformado simplemente en un órgano de refrendo del Poder Ejecutivo, con una Justicia Penal en el Fuero Anticorrupción que no resuelve las causas convenientemente y ahora, a un joven de 40 años –que ese no sería el problema- nos disponemos a sentarlo en el cargo más importante que tiene la Provincia de Córdoba.

Creo que el cargo de miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba es el más importante que puede tener una persona; es más que el Gobernador porque éste no puede decidir sobre la libertad de las personas, mientras que un miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia puede decidir sobre lo más sagrado que tienen las personas que es su libertad.

Digo “un control menos” porque no digo que Unión por Córdoba nos traiga malas personas, eso no está en discusión; son todas buenas personas, y si son afines a Unión por Córdoba parece que son mejores. Las tres últimas designaciones en el TSJ han sido para personas que tenían un claro embanderamiento, al menos funcional, a Unión por Córdoba. La doctora Cáceres de Bolatti, funcionaria permanente en áreas sensibles del Poder Ejecutivo provincial; mi amigo Armando Andruet, de reconocida filiación peronista, era lógico que en algún momento coincidieran sus brillantes antecedentes con su formación ideológica. Ahora, el doctor López Peña que viene sirviendo en los últimos 7 años al Gobierno de Unión por Córdoba en áreas sensibles.

¿Es que no hay en esta Córdoba, “la Docta”, personas para un cargo tan importante si no provienen de la formación de Encuentro por Córdoba? ¿No hay?

Imagino la ponderación de juicio que se debe tener para estar en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; las zonas grises que hay que resolver, porque no todo es químicamente puro en el Derecho. Para ello hace falta una gran experiencia de vida que otorgue esa ponderación de juicio a la que referí; pero no sé si este hombre la tiene. No prejuzgo si la tiene o no, pero creo que con un poco de esfuerzo podrían haber encontrado en esta Córdoba “la Docta”, la de los grandes juristas, alguien que no hubiera trabajado para ustedes en los últimos 7 años. Tenemos uno de los Colegios de Abogados más grandes, ¿no había forma de encontrar un jurista que no hubiera estado defendiendo los intereses de la Provincia o que no hubiera sido funcionario reciente del Ministerio de Justicia?

Por esto creo que ustedes se han dispuesto a renunciar a la capacidad de control. Si estuviéramos haciendo el nombramiento para otra Sala del Tribunal Superior, vaya y pase, porque se resuelven cuestiones patrimoniales; pero aquí se resuelve sobre la libertad de las personas, la honra de las personas. No sé si eligieron mal, no digo eso, pero estoy seguro de que podrían haber elegido mucho mejor.

Con respecto al pliego del doctor Bustos Fierro, coincido plenamente con lo que ha dicho la legisladora Montero: el Gobernador se ha empanicado. Cuando empezaron a aparecer esos videos sobre la “Córdoba real”; cuando empezamos a saber que lo que se decía de Miró era cierto; cuando

empezamos a saber todo lo que empezamos a saber; cuando empezamos a ver la cantidad de empresas que controlaba el señor Miró, o que controlaba el señor Karsten, el Gobernador se acordó tres días después de que aparecieran esos videos que tenía que designar a alguien en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Objetivamente, eso es lo que ha pasado. Repito, no sé si eligieron mal, creo que pudieron haber elegido mucho mejor, sobre todo pensando en una Provincia que carece de controles.

Con respecto al doctor Bustos Fierro, coincido plenamente con lo que ha dicho la legisladora Montero, forma parte del mismo ataque de pánico del Gobernador De la Sota. Las dos designaciones salieron juntas cuatro días después de que el legislador Fonseca pidiera una investigación a Córdoba Bursátil que, en definitiva, es Karsten, es TECSA, es Kolector, es Brito, en fin, todos los negocios que tarde o temprano saldrán a la luz, porque no se puede toda una vida tener el control de segmentos del Poder Judicial.

Hay un acontecimiento histórico que me vincula al doctor Bustos Fierro y que me lleva a votarlo positivamente. Hace mucho tiempo, antes de los acontecimientos de diciembre, cuando había colaborado activamente en la redacción de la legislación en materia de drogas de la Provincia, lo habían invitado a integrarse a la Fiscalía General de la Provincia y no se concretaba. Eso me hace pensar que el doctor Bustos Fierro hijo, de ninguna manera forma parte de la delicadeza que quiso tener el Gobernador empanicado con su padre. Estoy absolutamente seguro que ese chico no tiene nada que ver con algunas tertulias de poder que se desarrollan en este momento en las trastiendas en Córdoba. Tampoco sé si el padre conforma esa situación o si entendió que debía devolver, de alguna forma, el gesto hacia su hijo, pero, por parte del Gobernador, no me cabe ninguna duda, es mucha casualidad que haya mandado estos pliegos tres días después que esos videos empezaron a aparecer.

Como creo que a los hijos no hay que juzgarlos por sus padres ni por las tertulias de poder, hay que analizar objetivamente si el doctor Bustos Fierro hijo está en condiciones de ser Fiscal Adjunto de la Provincia de Córdoba, y, objetivamente creo que sí está en condiciones, porque para ser Fiscal Adjunto no se requiere la ponderación, la experiencia vital como para ser un Fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Creo que el joven tiene una trayectoria sana, limpia, no enredada, que viene a sumar a la Provincia de Córdoba, y por eso mi voto positivo hacia él, no así para el doctor López Peña, dejando expresa reserva que estoy absolutamente convencido que estos dos pliegos son el resultado de la desesperación final de un Gobernador que nunca se imaginó que iban a filmar la corrupción.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: en relación a los proyectos en tratamiento, adelanto el voto positivo de mi bloque a los acuerdos para designar a los doctores Sebastián López Peña como Vocal del Tribunal Superior de Justicia y Pablo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto.

Luego de la Audiencia Pública y de haber escuchado lo allí manifestado, obviamente, se advierte que se cumple con lo establecido no sólo por la Constitución provincial, sino también por las demás leyes que regulan a estas instituciones tan importantes de la Provincia de Córdoba en lo que hace a la designación de sus miembros.

Los antecedentes personales, sus calidades morales, su formación profesional, los antecedentes en la materia, en definitiva, hacen que ambos profesionales hayan merecido una valoración positiva para la propuesta de designación para tales importantes cargos.

Sin embargo, no quiero dejar de manifestar una preocupación con respecto al criterio de oportunidad con que el señor Gobernador propone ambas designaciones, por las circunstancias políticas a las que aquí se ha hecho referencia, sobre todo porque la designación de funcionarios de tal importancia conlleva la valoración de al menos dos o tres características de la República, que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial y, entre otras, con la responsabilidad de los funcionarios públicos, características republicanas que todos, desde el primero al último ciudadano cordobés, están

obligados a cumplir; obviamente, los funcionarios públicos y los que encabezan las primeras magistraturas con mayor responsabilidad aún.

La preocupación es en cuanto a la afinidad ideológica que acá se ha manifestado con respecto al doctor López Peña en relación con el partido del Gobierno y, por supuesto, el grado de parentesco que tiene el doctor Bustos Fierro, candidato a Fiscal General Adjunto, con el conocido juez federal en nuestra Provincia, teniendo en cuenta las características que, por supuesto, deben honrar, no sólo el señor Gobernador o el partido de Gobierno, sino también los propios profesionales que son designados para ocupar estos cargos. La responsabilidad de los funcionarios es un atributo que deben honrar, luego de ser designados para el desempeño de sus funciones, también estos funcionarios judiciales en una institución de un Poder tan importante como es el Poder Judicial de nuestra Provincia de Córdoba.

Por lo tanto, habiendo manifestado esta preocupación, pero valorando más los antecedentes profesionales y el futuro promisorio que sus antecedentes profesionales ocupando la función con la responsabilidad pública de funcionario típica de una República, me inclino por apostar a que estos funcionarios serán cabales defensores de ésta y, por lo tanto, la responsabilidad política correrá por cargo de quien los propone y, en definitiva, la sociedad cordobesa lo valorará en su conjunto.

Por estas razones, señor presidente, apoyo ambas designaciones.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: es conocida la posición del Frente de Izquierda respecto a las designaciones y a la elección de jueces y fiscales, puesto que tenemos otra concepción respecto a cómo deben ser elegidos. Entendemos que deben ser elegidos con mandato y voto popular; que sus mandatos deben ser revocables, que no deben tener ningún tipo de privilegio económico que tenga que ver con sus sueldos y con la intangibilidad de los mismos, y por eso en general nos abstenemos.

Sin embargo, en esta ocasión quisiera dejar claro el rechazo a estas dos designaciones por las siguientes razones: en el caso de Sebastián López Peña, quien va a ser designado Vocal del Tribunal Superior de Justicia, porque en la entrevista manifestó algo por lo que la banca del Frente de Izquierda, que fue elegida y que expresa el mandato de las mujeres de Córdoba que pelean por un derecho tan elemental como el de decidir sobre su propio cuerpo, verá violado sistemáticamente –como viene sucediendo en esta Provincia- el derecho de esas mujeres a acceder al aborto no punible, derecho que está consagrado en la Constitución y que en esta Provincia, con la firma de este abogado, Sebastián López Peña, es rechazado e impugnado. Por lo tanto, por respeto al mandato de las cientos de miles de mujeres que deciden abortar, en los casos que ya están establecidos en la Constitución que pueden hacerlo, tengo que rechazar esta designación.

Con relación a quien va a ser designado Fiscal Adjunto, en la entrevista le hicimos preguntas que, desde nuestro punto de vista, no tuvieron respuestas satisfactorias; se veía el notorio nerviosismo del entrevistado, quien está impugnado en una presentación para ser designado juez, a pesar de que quiere mostrar antecedentes en la defensa de los Derechos Humanos, por haber sido expuesto en una fotografía codeándose y riéndose muy jocosamente –más allá de sus explicaciones- con el principal responsable del genocidio cometido en la última dictadura militar en la Provincia, Luciano Benjamín Menéndez.

Que se nos esgriman argumentos ad hominem, es decir, que se haya enviado una carta al señor Secretario de los Derechos Humanos Fresneda o que el abogado de los derechos humanos Orosz haya apoyado la designación de Bustos Fierro no nos conforma porque entendemos que en la defensa, ante esto que se llama “la familia judicial”, hay intereses; por ejemplo, el Secretario de los Derechos Humanos de la Nación defiende a un gobierno que tiene nada más ni nada menos que a Milani, a Berni y a gendarmes caranchos que montan causas contra los trabajadores y contra aquellos que luchan por elementales derechos, como el derecho al trabajo, por lo cual, ven violados sus derechos humanos actuales.

Por estas razones, queremos que conste nuestro rechazo a estas designaciones.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.

Voy a hacer algunas apreciaciones respecto a lo que recién se dijo.

En primer lugar, no está tan alejado el razonamiento que realizan los legisladores De Loredó y Aurelio García Elorrio respecto de la posibilidad de duda que puede tener una persona que es funcionario de una gestión -lo cual no quiere decir que, necesariamente, milita en el mismo partido o tenga la misma ideología. Tan es así que la Constitución, en el inciso 9) del artículo 144, al final, dice: “El Gobernador, el Vicegobernador y los ministros, no pueden ser propuestos para integrar el Poder Judicial hasta seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones”; es decir que el convencional constituyente tuvo en cuenta el hecho de que un gobierno pudiera designar a alguien afín, pero lo tuvo en cuenta más que nada para los cargos de mayor relevancia, de mayor compromiso político, no así para el resto de la estructura jerárquica que forma parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, si esta es nuestra Constitución, que regula nuestras normas de conducta, la idea va en buen sentido y ha sido tomada por la Constitución pero hasta ese límite de cargos.

Los legisladores Pretto y De Loredó tienen razón en cuanto a que tal vez, por los hechos de público conocimiento que estamos viviendo en la actualidad, esta no sería la oportunidad, es cierto, señor presidente. Pero nosotros somos la continuidad institucional de un proceso que comenzó con la publicación en el Boletín Oficial el 12 de diciembre del año pasado, cuando todavía ni siquiera, por ejemplo, el Fiscal Nisman había sacado su pasaje para irse a Europa, estaba vivo. No pudimos prever esta realidad institucional que viviría la República Argentina el día de la fecha y los últimos días. Por lo tanto, de haberlo previsto, seguramente habríamos tratado este tema en otra ocasión, pero no se pudo prever, esto arrancó el 12 de diciembre del año pasado y cumplió los tiempos institucionales que establece la legislación, la Constitución y las normas que regulan este procedimiento, tanto el Decreto 3 de 2004 como la Ley 9003 y sus modificaciones, porque este tema del momento del pliego fue planteado en varias oportunidades.

En cuanto a lo manifestado por el legislador Birri, que propuso otros sistemas, quiero aclarar que cuando se votaron las modificaciones que establecían este sistema de designación e incorporaban al sistema de Audiencia Pública a estos magistrados, tanto la Ley 9163 como la Ley 9151, modificatorias de la Ley 9003, fueron votadas por casi unanimidad -salvo el bloque de Izquierda- de los bloques que existían en la Legislatura, donde se encontraba el Frente Cívico votando, inclusive, esta norma, aceptando como método -en aquel momento oportuno y correspondiente, para la designación de estos magistrados- el que estamos utilizando en este momento.

Respecto de lo que se manifestó sobre las causas judiciales y las vinculaciones que pueden llegar a haber, le digo, sinceramente, señor presidente, que por la Comisión de Asuntos Constitucionales han pasado más de 500 pliegos de jueces, fiscales, camaristas y asesores letrados y nunca se alteró el orden de mérito propuesto por el Consejo de la Magistratura, y también pasaron cientos y cientos de jueces de paz propuestos por la Comisión Asesora y nunca se alteraron los órdenes de mérito, por lo que debo pensar que se trata de un Gobernador que privilegia la Justicia por sobre decisiones políticas coyunturales.

Con respecto a lo manifestado sobre el parentesco, del padre; Orosz fue muy claro cuando nombró la Torá. Y quiero aclararles por qué nombró la Torá: porque allí figura la existencia de David, un rey guerrero, muy respetado por los hebreos, al que le siguió su hijo que fue considerado por la historia judía como un pacifista, como un sabio, como un justo.

Creo que deberían ver bien la posición de López Peña respecto del aborto porque creo que fue en otro sentido en cuanto a lo que recién mencionaban.

Y hablan de una fotografía, cuando han venido a defenderlo los principales referentes del Poder Judicial federal, que son los encargados de llevar adelante los procesos judiciales que condenaron a Menéndez y compañía, como también los representantes de Derechos Humanos que representaron a las víctimas -no los que se arrojan representaciones en la calle sino los que entran a Tribunales y ponen la cara-, por lo que no creo que Fresneda sea específicamente militante del Gobierno delosotista porque creo que forma parte del Frente para la Victoria, por lo tanto, no veo un interés político coincidente como el que se pretende hacer ver, sino verdaderamente una sincera carta de adhesión a esta designación porque se vio el trabajo que había hecho el doctor Bustos Fierro y porque estaban de acuerdo con él.

Por otro lado, tenía algo muy lindo para decirle al legislador García Elorrio que dijo del Papa sobre los jóvenes, pero como dijo que esa no era su oposición, le iba a recordar que grandes miembros del Superior Tribunal de Justicia, como el doctor Sessín y la doctora Tarditti, llegaron con 41 y 42 años respectivamente, por lo que me parece que con 40 años tenemos la expectativa de tener un muy buen miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Por todas estas razones es que pedimos la aprobación del presente pliego.

Sr. Presidente (González).- Corresponde poner en consideración la autorización para abstenerse de votar el pliego 15972, solicitada por el bloque del Frente Cívico.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del pliego 15971/P/14.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Vocal del Tribunal Superior de Justicia al señor abogado Sebastián Cruz López Peña, DNI 24.356.085.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 15971 leído por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Sebastián Cruz López Peña sea designado Vocal del Superior Tribunal de Justicia.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del pliego 15972/P/14.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia al señor abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro, DNI 16.159.798.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 15972, leído por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro sea designado Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 16177/L/15.

Por Secretaría se dará lectura a la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 18 de febrero de 2015.

A la Señora Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la 4ª sesión ordinaria del expediente 16177/L/15.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Se trata de un proyecto de ley incorporando el inciso 12 al artículo 50 de la Ley 6006, Código Tributario, referido a servicios públicos de higiene urbana.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Rodrigo De Loredó
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

–CAMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredó.

Sr. De Loredó.- Señor presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical hizo propio un pedido de un conjunto de intendentes de mi partido que han sugerido una propuesta de reforma del Código Tributario provincial vigente, que consiste en crear una nueva exención al Impuesto de Sellos para aquellos servicios públicos de higiene urbana, incluidos la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final, que estuvieran a cargo de los Estados municipales, comunas vecinales, entes públicos o sociedades del Estado, aun cuando estas prestaciones fueran contratadas o concesionadas a terceros operadores.

Históricamente –desde hace 16 años a esta parte–, este bloque viene señalando la importante presión tributaria que ejerce el Estado provincial, poniendo particular énfasis el crecimiento del Impuesto de Sellos que, a nuestro juicio, es distorsivo, no distingue capacidades adquisitivas, es anticíclico y afecta la economía y el comercio provincial. Tanto es así, que fue este partido quien, desde su plataforma gubernamental del año 2011, propició la eliminación de este impuesto en nuestra Provincia.

Como un desagregado de este razonamiento, señor presidente, en esta oportunidad vemos con satisfacción que el bloque oficialista –que representa al actual Gobierno– tenga la clara intención de acompañar un proyecto presentado por nuestro bloque, para evitar que los concesionarios de los servicios de recolección de residuos de los Estados municipales tengan que pagar este impuesto, considerando resueltamente que esta exención se traduce en la posibilidad concreta de brindar estos

servicios de una manera mucho menos onerosa para los ciudadanos de los más de 250 municipios y comunas que integran la Provincia de Córdoba.

Por esta razón, señor presidente, que es el argumento central por el cual hemos presentado esta iniciativa desde el bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando su tratamiento sobre tablas – motivo por el cual estamos considerándolo ahora con la Cámara en estado de comisión–, solicito la aprobación del presente proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.– Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que me sorprende que el legislador preopinante, que ha presentado varios proyectos de modificación del Reglamento Interno de esta Legislatura –insistiendo, incluso, en su tratamiento–, no lo haya tenido en cuenta en esta oportunidad.

Esto es así, obviamente, porque el proyecto de ley que se pretende aprobar, que modifica el Código Tributario –y el legislador preopinante le agradece al bloque oficialista su intención de acompañarlo–, no tiene otra finalidad que la de ayudar al Intendente de la ciudad de Córdoba, acordando y pactando con Unión por Córdoba una exención para estas dos empresas.

Quiero creer que estos han sido los elementos que han determinado que el legislador preopinante no recuerde el Reglamento Interno de esta Legislatura y un artículo específico de la Constitución provincial. Sé que es una persona de una gran memoria –que yo realmente no poseo– y no tengo dudas de que conoce todos los artículos de nuestro Reglamento Interno, por lo que atribuyo este “olvido” al objetivo específico del pacto que están haciendo con Unión por Córdoba para eximir del Impuesto de Sellos, no a todos quienes debemos pagarlo, esto es, los ciudadanos comunes, sino a estas dos empresas prestatarias de un servicio público de la Municipalidad de Córdoba.

El legislador De Loredó manifestó que el objetivo de este proyecto de ley es introducir una modificación al Código Tributario. El artículo 117 del Reglamento Interno expresamente dispone que “se requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley”, y en su inciso 3) dice: “Código Tributario”, o sea que para la modificación del Código Tributario se requiere la doble lectura. Pero esta mención que hace el Reglamento Interno de la Legislatura no es como otras sino que toma nada más ni nada menos que un artículo específico de la Constitución provincial, el 106, que expresamente dispone que para reformas de la Constitución, de las leyes de Presupuesto y del Código Tributario se requiere la doble lectura.

Además, este proyecto –que es de ley, no un simple proyecto de resolución– ni siquiera pasó por una comisión, y el artículo 113 del Reglamento Interno de la Legislatura expresa: “Todo proyecto, sea presentado por un legislador o remitido por el Poder Ejecutivo, será enunciado por Secretaría y pasado sin más trámite a la comisión correspondiente”; éste ni siquiera pasó por una comisión.

En verdad, elegir compañeros para la sanción de esta ley –y se lo digo con todo respeto al legislador preopinante–, en este caso Unión por Córdoba, es muy sospechoso y peligroso. Aproximadamente doscientos millones de pesos es lo que se les va a eximir a estas dos empresas, para beneficio –dicen– de los ciudadanos de Córdoba. ¿En qué se van a beneficiar los ciudadanos de Córdoba?, ¿ahora se acuerdan de los ciudadanos de Córdoba?, ¿de cuánto ha sido la suba de los impuestos en esta ciudad de Córdoba? ¡Qué casualidad que ahora, rápidamente, ingresan el proyecto de ley, no lo pasan a comisión y no lo someten a la doble lectura! Sólo para beneficiar a estas dos empresas, uno de cuyos presidentes –tengo entendido– es pariente del legislador Busso; tendría que ser pariente del legislador Busso para obtener la exención del Impuesto de Sellos, tal vez si me llamara Busso de apellido no se me cobraría este impuesto.

No es casual el acuerdo, no es casual el pacto que hoy están desnudando en esta Legislatura. Pero, ¿por qué digo que es peligroso asociarse? Lo es, fundamentalmente, para el legislador que es un defensor del Reglamento Interno de esta Legislatura, porque a Unión por Córdoba le da lo mismo la existencia o no del Reglamento, así como no le importó al Gobernador cuando casi al finalizar una sesión

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

irrumpió en este recinto y presentó el proyecto de ley que suspendía el aumento automático para los jubilados de esta Provincia; se reunieron en la sala de la derecha y en cinco minutos resolvieron aprobarlo sin siquiera pasarlo a comisión ni tratarlo. Vino el Gobernador, se reunieron en la sala de al lado y en cinco minutos aprobaron una ley que suspendió, y suspende actualmente, el aumento para los jubilados de esta Provincia; seis meses deben esperar para cobrar el aumento que nosotros y el resto de los empleados activos cobramos automáticamente.

¿Y el Reglamento?, ¿alguien le dijo al Gobernador: “Gallego, esperá que hay un Reglamento, tenemos que tratarlo”. Repito, en cinco minutos lo aprobaron. Por eso digo que son peligrosos estos pactos con ustedes, hacen lo que se les da la gana por la simple mayoría, les importa un comino el Reglamento, mucho menos la Constitución.

El Gobernador se jacta del respeto a las instituciones no respetó a la Legislatura porque hizo aprobar esta ley, ordenó que se aprobara en cinco minutos; tampoco respetó al Consejo de la Magistratura, y se lo digo al legislador Cid que reiteradamente insiste en que el Gobernador no altera el orden de mérito y respeta el Consejo de la Magistratura ¡Mentira! En el año 2002, alegando una emergencia judicial, creó la Comisión Asesora con siete miembros, cuatro de los cuales venían del poder político, para designar a más de 130 fiscales y jueces a los que, sin rendir examen, se los designó a dedo en el Poder Judicial. La Asociación de Magistrados, la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados se opusieron y públicamente manifestaron que el único objetivo que tenía esta designación era la suspensión del Consejo de la Magistratura, y la creación de la Comisión Asesora era para dejar efectivos a jueces y fiscales que tenían que llevar, nada más y nada menos, que la investigación de funcionarios de este Gobierno denunciados por corrupción.

Por eso, legislador De Loredó, es peligroso pactar con Unión por Córdoba porque no respeta ni el Reglamento ni la Constitución: se hacen los respetuosos de las instituciones, reviven el Consejo de la Magistratura después de designar a dedo a más de 130 fiscales y jueces, la mayoría en Tribunales II - ¡Qué casualidad! para los que no litigan- donde están los jueces, fiscales, penalistas, Cámaras del Crimen, Fuero Anticorrupción.

Es muy probable que invoquen para justificar este desapego, este paréntesis –sólo por hoy- al Reglamento de esta Legislatura, una reciente modificación, que se llevó a cabo acá, de un artículo de la Ley de Policía Fiscal, pero aclaro: es una Ley de Policía Fiscal, no es el Código Tributario. Y la Ley 10.249, se remitió conjuntamente con la Ley de Presupuesto, que modificaba el Código Tributario en el Título III, que específicamente dice: “Modificación de otras leyes”, y entre las “otras leyes” hace una modificación a un artículo de la Ley de Policía Fiscal que se refería a la mantención de un cargo jerárquico de agente de Policía Fiscal. Tal es así que se refiere específicamente a la Ley de Policía Fiscal y no al Código Tributario, que en los fundamentos de esa ley que nosotros sancionamos, -la 10.256, que ingresó como proyecto 16.111- expresamente se manifiesta que al enviarse desde el Poder Ejecutivo la tríada de leyes económicas para el corriente año, en el proyecto por el cual se modificaban artículos del Código y otras leyes de carácter tributario, lo mencionan específicamente. Entonces, para que después no me corran para otro lado y me digan que acá sancionaron y que no hicieron la doble lectura y que nosotros acompañamos, les digo que no. Era una Ley de Policía Fiscal y lo que se modificó era una cuestión de los agentes de Policía Fiscal para la retención de un cargo jerárquico, no era el Código Tributario.

Por eso, señor presidente, solicitamos por respeto al Reglamento Interno de esta Legislatura y a la Constitución provincial, vuelva este proyecto a comisión y tenga la doble lectura que por ley y la Constitución provincial le corresponde, máxime por la temática que implica: nada más y nada menos que el beneficio exclusivo y extremadamente sospechoso para estas dos empresas prestatarias, ¡qué casualidad!, de un servicio de la Municipalidad de esta ciudad de Córdoba.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por la legisladora Leiva, de vuelta a comisión del presente proyecto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: la legisladora Leiva se refirió a una cuestión de forma que termina siendo una cuestión de fondo, en relación al respeto por la Constitución, y habiendo tomado el Pleno la decisión de tratar esta ley, que además suponemos será de una sola lectura, en verdad, sobre la cuestión de fondo nos interesa decir dos o tres cosas.

En primer lugar, debe quedar en claro que compartimos con otras fuerzas políticas –así lo hemos sostenido en nuestra plataforma electoral- la eliminación de este Impuesto de Sellos, que es absolutamente distorsivo para los ciudadanos de la Provincia. Pero en este caso en particular, se vuelve no solamente distorsivo sino absolutamente subjetivo, y esto es grave. Estamos por sancionar una ley que está hecha a medida, que tiene nombre y apellido, que se llama “Lusa y Cotreco”.

Estamos por sancionar una ley que les va a significar no a los ciudadanos de Córdoba –ya vamos a ver los números- sino a los empresarios de Lusa y Cotreco no desembolsar casi 207 millones de pesos, según los cálculos más optimistas, que establecen que el negocio final se va a cerrar en 120 millones, que es a lo que aspira cerrar el contrato de recolección de residuos.

Se van a ahorrar estos 207 millones de pesos estos señores, mientras cientos y miles de ciudadanos de nuestra Provincia, cada vez que tienen que alquilar una miserable propiedad, una pieza o lo que fuera, necesitan pagar sumas que no están a su alcance y que les significan una afrenta al bolsillo.

Es mentira que esto va a beneficiar a los ciudadanos; esto beneficia a dos empresas que claramente están extorsionando a la ciudadanía cordobesa con contratos millonarios. A ellos va a beneficiar porque el Impuesto de Sellos es “tiqui y taca”, debe estar depositado y acreditar que lo hicieron en el momento en que se firma el contrato o se da la licitación.

Circuló por varios e importantes medios de Córdoba la excusa de Lusa y Cotreco –según ellos- de que el problema era que había habido un aumento significativo en el Impuesto de Sellos por parte de la Provincia.

Más allá de la discusión de fondo, que sostenemos, sobre que no debe existir este impuesto, que además significa solamente el 4 por ciento de los ingresos impositivos propios de la Provincia, se dijo que había habido un aumento de la alícuota que iba del 0.4 al 1,8 por ciento. Y se hicieron operaciones mediáticas importantes por parte de las empresas para sostener esto; no estoy hablando de un medio, sino de muchos medios que hablaron de este incremento en la alícuota.

Ante todo esto, tengo en mis manos la Ley Impositiva 2006, que en su artículo 26 inciso 8, dice que es del 18 por mil, es decir, del 1,8 por ciento. En el 2007, también es del 1,8 por ciento; igual en el 2008 y así hasta llegar al 2015, la alícuota en materia de contratos de concesión ha sido del 18 por mil desde hace muchísimo tiempo. Es más, por lo menos la empresa Cotreco no desconoce –ni puede argumentar- que esto no le encareció los costos. ¿Sabe por qué? Porque la empresa presta servicios en cuatro municipios más, sin contar la ciudad de Córdoba, y recientemente, en el 2011, renovaron contrato de licitación y todos estos municipios tuvieron que pagar el Impuesto de Sellos en los contratos con la empresa. Me refiero a los municipios de Villa María, Carlos Paz, Río Cuarto y por último Río Tercero; en todas Cotreco presta servicios y firmó contrato, pagando el Impuesto de Sellos.

Por si esto fuera poco, el artículo 65 del pliego de licitación del contrato de la basura en la ciudad de Córdoba, clara y específicamente refiere que: “Están a cargo del concesionario todos los impuestos, peajes, tasas, contribuciones o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales que recaigan sobre el concesionario, sobre la actividad que desarrolle por la prestación del servicio de higiene urbana, sobre sus bienes, inmuebles, instalaciones y/o equipos; toda variación de alícuotas, creación o supresión de impuestos, tasas y contribuciones

durante el contrato serán tenidas en cuenta a los efectos de la fijación del precio contractual”. Es decir que las dos empresas incluyen el Impuesto de Sellos, por lo cual decimos que se trata de una extorsión.

Y cuando nos dicen, también desde operaciones mediáticas, que esto va a beneficiar a los cordobeses, quiero aclarar que es mentira que la alícuota haya sido bajada al 1,2 por ciento o al 1,7 por ciento. Si hay alguna sentencia judicial no va en contra de la ley y, si se trata de algún caso particular, alguien deberá acudir a la Justicia, pero la alícuota que fija la Ley Impositiva es del 1,8 por ciento, y sobre esta base se deberán tomar las cuentas. En el mejor de los casos 120 millones por doce meses, por ocho años, da 207 millones de pesos que se van a ahorrar las empresas de tributar a la Provincia.

Señor presidente: 8 años son 96 meses, ¿sabe cuánto es prorrateado en los 8 años de contrato, sin contar la inflación y demás que solemos hacer?: 2.160.000 pesos por mes. ¿Sabe cuánto le significa a cada cordobés por mes esta reducción, tomando los datos del censo 2013?: 1,60 pesos. Pero a las empresas le significan 200 millones de pesos ¿Sabe cuánto les va a dar por año al terminar el contrato si a ese monto de dinero lo pusieran en plazo fijo? 185 millones de pesos, además de los 200 millones de pesos. Fíjense el “pedazo” de negocio que están haciendo estos empresarios.

Si en verdad Unión por Córdoba está tan ávido de ayudar al Gobierno de la ciudad, pues que le dé la ayuda que necesita, no otorgando exenciones impositivas que generan desigualdad y que beneficia a empresarios y no a los ciudadanos.

Pero, voy a ir más allá: si quieren beneficiar a los ciudadanos, eliminemos ya, hoy, en este momento –y estamos dispuestos a votarlo- el Impuesto de Sellos. Eso es beneficiar a los ciudadanos. No nos mientan en la cara. No quieren ayudar al Municipio ni tampoco a la ciudadanía de Córdoba. Por el contrario, esto es parte del negocio de las empresas con las que tienen cientos y cientos de vínculos y contratos.

Finalmente, no podemos dejar de dar un dato esencial: les van a hacer ahorrar a los empresarios de Lusa y Cotreco 200 millones de pesos y no al Municipio, como tampoco a los ciudadanos. No nos mientan en la cara. Son 200 millones de pesos que se ahorran los empresarios, y el Gobernador de la Provincia prometió y dispuso que la ayuda para las Sierras Chicas, que están atravesando una crisis estructural profunda, va a ser de 150 millones de pesos. Ese monto será para toda la ciudadanía de las Sierras Chicas que están bajo el agua y para sus municipios. Pero para las empresas extorsionadoras se destinan 200 millones de pesos. Es una verdadera vergüenza que ustedes nos quieran hacer creer que están beneficiando al Municipio o a los ciudadanos.

También debemos decir que hemos consultado a los Intendentes y -excepto los municipios grandes que hemos mencionado o el de San Francisco, que también ha renovado con otra empresa- la mayoría presta el servicio por sí mismo, es decir, está en manos del Estado, por lo tanto, no existe este problema.

En este contexto, no vamos a acompañar este negocio que están haciendo dos empresas en desmedro de las finanzas de la Provincia, en desmedro del interés de los cordobeses porque no va a haber un traslado de beneficios a los ciudadanos de la Capital. No nos mintamos más, lo que está haciendo Unión por Córdoba es claramente avalar que dos, tres, cuatro o cinco tipos se lleven a sus bolsillos 200 millones de pesos que podrán poner en plazo fijo y les redituará otros 200 millones al cabo de un buen tiempo.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a adelantar el rechazo a este proyecto de ley, no solamente por los argumentos que bien ha esgrimido la legisladora preopinante sobre el enorme negocio que significa para las empresas prestatarias de este servicio público y con las que Unión por Córdoba tiene enormes relaciones, sino también porque no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de evaluar todos estos números que ha dado la legisladora porque ha sido presentado intempestivamente para que decidamos sobre algo que afecta a la población y que va a significar la exención a la que se refería.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Se pone en el medio a los trabajadores, se dice que es para saldar las deudas e indemnizarlos y se habla de que se va a beneficiar a la población. Entendemos, tal como viene sucediendo, que no es ese el objetivo sino sellar enormes acuerdos que tienen con estas empresas prestatarias.

La legisladora preopinante refería que la única manera de evitar estos enormes negociados es que todos los servicios públicos estén bajo control del Estado, que en este caso sea reestatizada la recolección de los residuos, pero no para que los gobiernos municipales o la Provincia sigan haciendo negocios y utilizándola como una caja para su propio enriquecimiento sino que esté bajo el control de los trabajadores y de los usuarios, que son los únicos interesados en que un servicio elemental como la recolección de residuos, que hace a la sanidad de la población, sea efectuado.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria no va a acompañar este proyecto.

Nos llama la atención la forma en que lo presentó el legislador De Loredó, pidiendo el tratamiento sobre tablas, cuando en este recinto escuchamos en reiteradas oportunidades hacerle reclamos de distinta índole a Unión por Córdoba por esta cuestión, y ahora el bloque mayoritario apoya este proyecto presentado por el legislador De Loredó, lo que lo deja mal parado para las próximas alocuciones si es que llega a ocurrir.

Perdón, señor presidente, creo que la legisladora Rista está solicitando una interrupción.

Sr. Presidente (González).- Legisladora Rista, ¿solicita una interrupción?

Sra. Rista.- Es una cuestión personal que ya se la dije al legislador, pero si hace falta la hago pública.

Sr. Presidente (González).- Señor legislador: continúe en el uso de la palabra.

Sr. Salvi.- Señor presidente: entendemos que no hay motivos ni razones para esta premura, como lo decían las legisladoras preopinantes, particularmente la legisladora Montero.

Además, debo señalar que nos enterarnos de esto a través de un medio de comunicación. A las nueve de la mañana nuestros asesores quisieron saber si existía algún proyecto y de qué se trataba y nos manifestaron que no había ingresado nada, y después aparece. Esto nos parece un poco desprolijo.

Por estos motivos, desde el bloque del Frente para la Victoria, y en virtud de lo establecido en el artículo 119 del Reglamento Interno, solicitamos la vuelta a comisión del citado proyecto.

Sr. Presidente (González).- Entiendo que acaba de formular una moción de orden de vuelta a comisión, la cual ya fue votada negativamente.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: esta mañana llegué a la Legislatura, tomé el diario y me enteré de que hoy se iba a tratar, en esta Casa, una ley vinculada a exenciones del Impuesto de Sellos, donde había en juego doscientos millones de pesos de las arcas provinciales. Eso decía el diario. Alguien me preguntó si eso podía ser cierto y dije: "De ninguna manera, eso no puede ser cierto"; integro la Comisión de Economía, no nos habían citado, no había llegado ninguna citación para hablar de ese tema, y después, en la Comisión de Labor Parlamentaria, efectivamente, apareció el proyecto. Doscientos millones de pesos en una tarde -¡vamos bien así!- sin que ninguna comisión de la Legislatura haya podido estudiarlo.

Después de esto, al que me hable de calidad institucional en esta Cámara lo miraré con los ojos grandes, sea del Gobierno o de la oposición; ya nadie más puede hablar de calidad institucional en esta Cámara, ni uno reclamársela al Gobierno ni el Gobierno reclamársela a la oposición. Y todavía no he

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

entrado al fondo del asunto. Simplemente, hemos aprobado las normas impositivas tributarias del Presupuesto hace dos o tres meses y a nadie se le ocurrió semejante cosa, al contrario, los ministros del Poder Ejecutivo hablaban de que era preocupante que el Impuesto de Sellos viniera cayendo.

Acá pasa una de dos cosas: o el oficialismo en esta Provincia está en una etapa de metapoder, o sea, está más allá de todo vínculo con el sistema jurídico y ejerciendo el poder al estilo de los Borbones franceses; o hemos entrado en un período revolucionario del que no nos hemos dado cuenta y el derecho es lo que hace falta cada quince minutos, porque realmente –como lo decía en Labor Parlamentaria- ¿cómo nos van a pedir calidad institucional a los legisladores si nos acabamos de enterar –por ejemplo, me estoy enterando de la magnitud de lo que se va a votar- por las intervenciones de los legisladores?

Señor presidente: creo que podemos pararlo a esto, porque así no hiciera falta la doble lectura – que hace falta, por lo cual estamos sancionando una ley nula- por lo menos para que nos respetamos entre nosotros, porque hasta ahora veníamos diciendo que la Legislatura era un órgano de refrendo de José Manuel De la Sota; ahora también es un órgano de refrendo de Ramón Mestre. Explíqueme esto: ¿de quién es órgano de refrendo esto? De José Manuel De la Sota, sí, lo sabemos. ¿Es también un órgano de refrendo de Ramón Mestre? ¡Qué me importa a mí la campaña a gobernador de Ramón Mestre!, ¿por qué pagarán los cordobeses 200 millones de pesos para que este señor pueda mostrar algo que necesita imperiosamente para que Pretto le levante la censura y sea el candidato a gobernador? ¡Terminemos con esto! Esto es muy poco serio. ¡200 millones de pesos de los cordobeses! ¿Cuánto nos costará la candidatura a gobernador de Mestre? Perdón, ¿cuánto le costará a De la Sota la candidatura a gobernador de Mestre? Pero, por lo menos, que la pague con plata de él, no con plata de los cordobeses; ¡que le hable a Karsten, a Miró, que traigan la plata de Brasil, que hagan algo! Pero no con la plata de los cordobeses. ¡Paren la mano, salvajes! Son salvajes. Si aprueban esta ley demuestran que son auténticamente salvajes. Se burlan de las instituciones, se burlan del bolsillo de los cordobeses.

Lo que ha pasado en Sierras Chicas va a costar 150 millones de pesos y ustedes van a regalar 200 millones. ¿Qué les pasa? ¿Tan importante es mantener el poder? ¿Tan importante es inventar candidatos a gobernador para partir a la oposición? ¡Paren!

Les voy a contar una cosa, con absoluta franqueza. Había un señor, al cual quería mucho, que una vez, cuando salíamos de un velorio, me pidió que lo llevara al entierro –era una persona mayor; yo le dije: “señor, no hay entierro, lo van a cremar”; “¿cómo que lo van a cremar?”; “sí, se lo quema” –eran tiempos en que recién empezaban a realizarse estas prácticas-; “yo quiero ir al velorio”; “no hay velorio, hay cremación”. Al final, el hombre entendió y me dijo: “para vivir así mejor no haber nacido”. Lo mismo le digo a mi amigo Rodrigo De Loredó: “para hacer cosas como estas le hubiera convenido no ser presidente de ese bloque”.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).– Legislador Salvi: ¿solicita nuevamente la palabra?

Sr. Salvi.– Discúlpeme, señor presidente.

Tengo entendido, si no escuché mal, que se votó la moción de que fuera nuevamente a comisión; pero nunca estuvo ese expediente en comisión, por lo tanto, me parece que lo correcto es lo que yo propuse, porque no puede ir nuevamente a comisión ya que nunca estuvo allí.

No sé si estoy equivocado.

Sr. Presidente (González).– Es el envío a comisión lo que fue rechazado. En este momento la Cámara está en comisión.

Tiene la palabra el señor legislador De Loredó.

Sr. De Loredó.– Gracias, señor presidente.

Voy a organizar las ideas, en mi calidad de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en función de los argumentos que defienden el proyecto y a que he sido aludido a título personal.

Para extender un poco la argumentación que formulara al comienzo –muy escueta, sucinta y objetiva- y reforzar esos conceptos e ideas, digo que nosotros estamos hoy sometiendo a votación un proyecto por el que se propone la eximición impositiva de un impuesto al que el radicalismo ha considerado, históricamente, distorsivo y que grava de forma excesiva a los contribuyentes, por lo que propuso –más precisamente en su plataforma de gobierno del 2011-, lisa y llanamente, su derogación.

Las circunstancias fácticas de la rigurosidad de los hechos dan cuenta de que ese anhelo del radicalismo hoy puede verse consagrado en forma gradual o reformista –como uno quisiera llamarlo.

Puntualmente, observamos que existe predisposición a avanzar en quitarle presión impositiva a ese impuesto, por lo menos a parte de los servicios que grava el Impuesto de Sellos. Pero, estamos votando una exención en sentido abstracto, general, y para los tiempos, a futuro. De ninguna manera desconoce este bloque –ni mucho menos este legislador- que, puntualmente, puede resultar beneficiado el Municipio de la ciudad de Córdoba que, entre otras cosas, es el que alberga algo así como el 40 por ciento de los habitantes de la Provincia; pero, por las características de las leyes que sanciona este Parlamento puede beneficiar, a futuro, a otros municipios que concreten concesiones o contratos con terceros, con cooperativas, con entes públicos o privados de recolección de residuos. Es más –este es un elemento nuevo que se agrega a la discusión-, puede beneficiar a municipios que ya hayan firmado contratos de recolección de residuos, que hayan pagado el Impuesto de Sellos, por el prorrateado que reste para la culminación de contratos.

Cada representante de nuestra democracia cordobesa y de nuestra República, como está organizada nuestra sociedad y comunidad en esta Provincia, tiene roles y objetivos a cumplir. No es, en este caso, el rol de los legisladores provinciales el conocer en detalle cada uno de los procesos de concesión, privatización, tercerización o estatización con los cuales el Estado presta sus respectivos servicios. Con esto quiero dejar absolutamente en claro, porque he sido aludido, una opinión personal que tengo como legislador de esta bancada y quiero que conste en la versión taquigráfica.

Las obligadas al pago de este impuesto son las empresas, que para el caso puntual de la Ciudad de Córdoba, como se ha señalado, involucraría a las dos empresas que están en este proceso licitatorio que no encuentra fin desde hace más de doce años, señor presidente, y ese también es un dato objetivo. Pero va de suyo que, de ser eximido de este impuesto, la lógica indicaría que el beneficio deba ser trasladado a la ciudadanía en la conclusión de un servicio menos oneroso de lo que inicialmente se preveía con esta carga fiscal que deban abonar quienes tengan que hacer ese contrato con el Municipio.

Este legislador que está fundamentando este proyecto va a ser el primer representante político en calidad de dirigente del radicalismo y no en el rol institucional que se me ha asignado como legislador de esta Provincia, el que pondrá el reparo, el reproche, la observación o el repudio respectivo si el beneficio fiscal de hoy, con una exención impositiva, para los tiempos y de forma general, que reciban eventuales contratistas del proceso licitatorio de la recolección de residuos de la Ciudad de Córdoba, no se traduce en términos objetivos y concretos en una concesión del servicio de recolección de residuos para la ciudad de Córdoba menos oneroso para el pueblo de Córdoba y para el 40 por ciento de los habitantes de esta Provincia que, como legisladores, nos hemos obligado a custodiar y legislar en su beneficio, señor presidente. Lo quiero dejar sentado en la versión taquigráfica de este Parlamento, porque no conozco el detalle y no forma parte de mis funciones ni de mis responsabilidades como legislador provincial. Sería soberbio de mi parte anticipar que conozco en detalle cada uno de los procesos licitatorios, o las formas y modalidades en que se prestan los servicios que cada uno de los municipios tiene la obligación constitucional de brindar. Quiero dejar absolutamente clara esa postura.

Este es un beneficio en términos generales, es una discusión en sentido abstracto, rige para los tiempos y no me voy a hacer cargo de hipótesis anticipadas de cuestiones que aún no han sido concluidas. Sé que hay un proceso en marcha, sé que hubo ofertas presentadas por distintas empresas y voy a ser un observador interesado y responsable en dar cuenta si este beneficio fiscal se traduce en beneficios para los ciudadanos de Córdoba. Además, dentro de las argumentaciones históricas del

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

radicalismo, en cuanto a la observación que tiene en la forma en que administra los recursos el Estado provincial, son varias sesiones y años en los que venimos señalando que hay un esquema extremadamente centralista y discrecional de los recursos y de los fondos que corresponden a los municipios; entonces, hace un tiempo a esta parte venimos señalando una situación de asfixia de los municipios que, sin embargo y pese a ello, tienen la obligación constitucional de brindar probos y mejores servicios a sus ciudadanos.

Ese es el noble objetivo despojado de cualquier interés del cual, extrañamente, puedo encontrar hoy que algunos adjudican a esto, por lo menos en cuanto a mi persona se trate; ese es el noble objetivo por el cual el radicalismo propone este proyecto de ley.

Cierto es, y doy cuenta de ello, y lo expresé en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que me parece absolutamente razonable el planteo de contar con el tiempo suficiente para analizarlo en detalle, razón por la cual me comprometí en la reunión de dicha Comisión a hablar con los intendentes de mi partido, que me habían planteado este tema como una cuestión de urgencia, para que me den los argumentos que logren justificar el pedido de urgencia, que es el instituto que estamos utilizando hoy para el tratamiento de la norma. ¿Qué es un instituto? Que tiene recepción institucional, legal y constitucional, pero para lo cual tiene que estar debidamente justificado.

Inmediatamente correspondieron a mi pedido, me dieron argumentaciones vinculadas al proceso licitatorio de la Ciudad de Córdoba; lo digo con absoluta frontalidad y franqueza: me dieron las explicaciones del trámite burocrático licitatorio respectivo, que tiene que ver con el fenecimiento del contrato precario al 31 marzo, que tiene que ver con la posibilidad de mayores indemnizaciones a los trabajadores, de ingresarse en el mes de marzo, y me dieron argumentos procedimentales –a mi juicio suficientes– para sostener el tratamiento excepcional y previsto por nuestra legislación o Constitución, para abordarlo sobre tablas sin el paso respectivo y el estudio mesurado de las comisiones.

Me parece absolutamente atendible, respetable, el reproche y el argumento de los legisladores opositores de las distintas bancadas que han expresado esa salvedad, a punto tal que la entendí correcta, y como pedí las explicaciones del caso y me fueron brindadas, es por eso que entendemos válido que hoy sea tratado bajo el procedimiento sobre tablas, sin el respectivo paso por las comisiones.

Finalmente, sobre el trámite formal –que me parece un tema, también, por lo menos “vidrioso”–, sobre si exige o no este proyecto una doble lectura, la postura que el bloque del radicalismo considera aplicable en este caso es que el procedimiento de doble lectura está previsto en la Constitución como garantía de la ciudadanía, en virtud a que se le concede al Estado ese poder de imperio para hacerse de recursos de los ciudadanos –que están siendo custodiados por nuestra propia Constitución y que garantiza el derecho a la propiedad privada– para fines generales de la ley, y esa es la naturaleza misma de los tributos, sean tasas o sean impuestos.

Consideramos que al tratarse de una exención, el requisito de garantía ciudadana no tiene, en este caso, la incumbencia, la exigencia o la rigurosidad que tendría para el caso de la creación de un nuevo tributo. Me parece que hay algún antecedente parlamentario en ese sentido. No termino de interpretar cuál es la distinción formal entre una reforma de una ley de policía fiscal –porque para el caso quien puede lo menos puede lo más. Me parece que, en definitiva, en ese episodio, que ha contado también con el acompañamiento de legisladores de distintas bancadas, se ha tomado un criterio similar a este.

El procedimiento de doble lectura es un procedimiento garantista, que busca que haya la máxima transparencia toda vez que el Estado va a ser autorizado a tomar recursos de los ciudadanos para el cumplimiento de sus fines, por el sólo poder de imperio del cual está investido por nuestra Constitución.

Como acá en definitiva lo que se hace es, a los obligados al pago eximirles del pago, consideramos que el requisito de doble lectura puede ser en este caso sorteado. De no ser así, se formularán los planteos respectivos y en cuyo caso deberá dársele el tratamiento que corresponda al proyecto en cuestión.

Esos son los argumentos por los cuales el radicalismo hace propio este proyecto, lo presenta, ha sido un pedido de intendentes del radicalismo y, muy particularmente, del Intendente de la Ciudad de Córdoba, sobre el cual también quiero hacer una consideración de naturaleza política porque me parece que se han mezclado los argumentos, y en esto también quiero ser muy frontal, reflexivo y sincero.

Históricamente desde el radicalismo –ya lo decía Raúl Alfonsín– propiciamos –pese a lo que hoy el Gobierno nacional predica y le hace creer a parte de la sociedad y fundamentalmente a los jóvenes– que la política no es conflicto sino que es consenso. Algunos dicen que son dos caras de la misma moneda, porque si es consenso es porque previamente estaba el conflicto. Pero para nosotros, para los radicales, históricamente –y de eso puede dar prueba la génesis de nuestro nacimiento y nuestra pacífica vida institucional de más de cien años–, la política es consenso; y siempre vamos a bregar por acuerdos institucionales y por aquellos que benefician a las gestiones y a las relaciones entre las instituciones. De hecho, el legislador García Elorrio, en reiteradas ocasiones –de forma responsable, ocurrente e incisiva– ha exigido consensos, acuerdos y diálogos, aun entre las esferas gubernamentales provincial y nacional, cuyas políticas y gestiones –lo sé por el conocimiento que tengo de su persona– no comparte. He sido testigo de cómo él, en forma insistente, ha exigido diálogos y consensos en beneficio de las gestiones y de los gobiernos.

Insisto –en términos personales– con mi concepto inicial: repudio y denuncio –voy a seguir haciéndolo– todo acuerdo que no tenga que ver con la cooperación natural y sana a la que mandan nuestra Constitución y la ciudadanía. Todo acuerdo que persiga intereses subalternos y espurios, así como acuerdos electorales a espaldas de los ciudadanos, son y seguirán siendo denunciados por quien habla y por muchos otros radicales que piensan en igual sentido. En cambio, a todos aquellos acuerdos interjurisdiccionales, interinstitucionales de los distintos Estados –en sus escalas municipales, provinciales y nacionales–, cooperativos y solidarios entre ellos para proveer de mejores gestiones y soluciones efectivas a sus ciudadanos, no sólo los acompañaremos desde el bloque de la Unión Cívica Radical sino que –en consonancia con lo expresado sobre el legislador García Elorrio– seguiremos bregando para que continúen existiendo.

Personalmente –vuelvo al comienzo de mi alocución–, estoy particularmente interesado en observar los procesos licitatorios respectivos, para que los beneficios fiscales de exenciones impositivas –que el radicalismo viene exigiendo desde hace décadas– se traduzcan en servicios a la ciudadanía, menos onerosos y más eficientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.– Señor presidente: con relación al proyecto en tratamiento –contenido en el expediente 16177–, quiero manifestar que, en principio, estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión planteada, en el sentido de eximir del pago del Impuesto de Sellos –en el contrato del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos– a los municipios que opten por la posibilidad de transferir a un prestatario o concesionario el servicio de que se trata.

En primer lugar, debo destacar que el artículo 31 de la Constitución provincial prevé que es esta Legislatura la que debe resolver sobre las exenciones impositivas; en segundo término, tratándose de una ley de carácter tributario –que se refiere específicamente a un impuesto concreto–, el artículo 106 de nuestra Carta Magna establece el tratamiento en doble lectura; en tercer lugar, el Reglamento Interno de esta Legislatura también prevé, en su artículo 117, el tratamiento en doble lectura para determinados proyectos de ley, entre ellos los de carácter tributario, como el que se encuentra en tratamiento. Por último, el propio Reglamento Interno establece la obligación de que todo proyecto que ingresa a esta Legislatura, luego de su lectura, pase a comisión; no obstante, este último punto estaría zanjado porque la Cámara se encuentra, en este momento, en estado de comisión.

Entiendo y comparto el criterio que aquí se ha esbozado en el sentido que se trata de un tributo distorsivo o regresivo, y sería bueno señor presidente, que se estudiara el Código Tributario –porque

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

puede haber otros similares- y nos abocáramos a tratarlo, que de una vez por todas podamos debatir para considerar la posibilidad de eliminarlos -si reúnen estas características- o reducirlos o graduarlos para quitarles ese peso que tienen sobre las arcas públicas o, en definitiva, sobre los ciudadanos que tienen que afrontar el pago de este tributo.

También sería una buena discusión plantear si es un impuesto que, a pesar de tener estas características de ser distorsivo, la Provincia necesita mantener; en todo caso, se podría debatir acerca de la necesidad de conservarlo para un sector y eliminarlo o reducirlo para otro; me estoy refiriendo concretamente a que se podría eliminar o reducir para el sector público, tal como lo establece el objeto del proyecto en tratamiento.

Ahora, tratándose de un impuesto que grava contratos de concesión que se otorgan por varios años y que acumulados en el tiempo suman semejantes cifras -se está hablando de 207 millones de pesos-, comparto el criterio del legislador De Loredó en el sentido de la preocupación y el esmero que ha puesto en cuidar o velar para que ese beneficio se traslade a los vecinos y de ninguna manera siga encareciendo los costos de prestación de un servicio tan importante como éste.

Habiendo también evaluado el hecho de que devolver proporcionalmente este impuesto a los frentistas sería de un monto casi insignificante -se hablaba de 1,60 o menos de 2 pesos-, creo que por más que se haga el esfuerzo en tratar de devolverle al contribuyente el monto del gravamen de este impuesto para que sea menos oneroso el servicio sería prácticamente inocuo. Sí sería más atinado debatir la cuestión en el sentido de que si está previsto en el pliego y la empresa lo debe pagar, que ese beneficio que se le hace al eximirlo se traduzca en un beneficio tangible para la gente. Más concretamente, en un día como hoy, después de cuatro días de lluvia, con tres barrios de Córdoba que están sufriendo las consecuencias de las inundaciones, bien podría ir toda esa masa de recursos destinada, por ejemplo, a desagües pluviales o a solucionar las consecuencias por las inundaciones de estos tres barrios que las están sufriendo.

Pero esa sería una cuestión más de fondo a discutir, no alcanzo a entender la urgencia -si bien también se ha hecho un esfuerzo por explicarla-, porque, en todo caso, se podría convocar a los intendentes interesados en este pedido, escucharlos en comisión o en una Audiencia o del modo que sea más conveniente, para poder evaluar con mayor firmeza y con más asidero las ventajas que tendría una exención de este tipo y, en ese caso, resolver rápidamente una ley tan importante como ésta, que podría ocurrir en la próxima semana.

Concretamente, señor presidente, para intentar zanjar esta diferencia que se ha planteado mociono que, tratando de afectar lo menos posible la institucionalidad de este Poder, y en función de que la Cámara ya se ha constituido en comisión, se considere a esta sesión como la primera lectura de este proyecto, convocar rápidamente a los intendentes en el transcurso de esta semana, y votar lo antes posible en segunda lectura ya con la opinión de los intendentes -que son los interesados- para que, por lo menos, nos dé mayores argumentos o fundamentaciones a todos los legisladores para decidir sobre esta cuestión.

En definitiva, la premura de sacar hoy esta ley, obviamente, va a herir de muerte a la institucionalidad y al Reglamento Interno de la Cámara. ¿Qué va a hacer Fredy Daniele si no va a poder trabajar en comisión este proyecto? Eso me preocupa mucho.

Para ser prácticos, podría considerarse esta sesión como la primera lectura, rápidamente convocar a los intendentes, para mañana o pasado y, por qué no, estar votando en la primera oportunidad -que podría ser el próximo miércoles- en segunda lectura y, de esa manera, poder atender un pedido que es importante, pero respetando la forma y la institucionalidad de esta Legislatura.

La cuestión de fondo es que si estos recursos son importantes en la acumulación de los años que este tributo va a producir, obviamente, las empresas no tienen que ser las beneficiarias de este tributo, pero sí pueden serlo los vecinos que estén padeciendo alguna circunstancia, como las que hoy están sufriendo tres barrios de la Ciudad de Córdoba, y el intendente de Córdoba tendrá que dar una respuesta. Ahí tiene muchos recursos que puede destinarlos y zanjar esta diferencia de opinión entre todos los legisladores.

Concretamente, mociono esto y, en definitiva, quiero rescatar la cuestión de fondo, cuyo debate puede ser importante para saber si este tributo debe permanecer o no. Por estas consideraciones, si no se opta por ello y se pasa a votación, adelanto mi voto negativo, no sin instalar la preocupación porque es un tributo que merece mayor atención, estudio y tratamiento en comisión para resolverlo definitivamente.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: en honor a la brevedad no voy a incorporar nuevos argumentos a los ya expresados por la mayoría y los bloques de la oposición. Creo que han sido decididamente elocuentes sobre la inconveniencia de tratar y votar en el día de la fecha el proyecto en tratamiento.

Coincido, desde el punto de vista técnico-jurídico, en que corresponde la doble lectura, que política e institucionalmente es un acto de responsabilidad tratarlo en las comisiones respectivas, razón por la cual sumo mi voto negativo al momento de resolver sobre la cuestión.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Legisladora Leiva ¿solicitó nuevamente el uso de la palabra?

Sra. Leiva.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: en verdad, con todo respeto le diría al legislador De Loredó: “No aclares que oscureces”.

En la ley que se envió conjuntamente con el Presupuesto se estableció una modificación al artículo 250 del Código Tributario de la Provincia, que reza: “Están exentos del pago del impuesto establecido en este Título...” y el título al que se refiere es el del Impuesto de Sellos, y ¿sabe qué, señor presidente? Lo tratamos en doble lectura, pero ahora no.

Entre los proyectos que ha ingresado el legislador De Loredó está el que hacía mención hace un rato, un proyecto de modificación al Reglamento Interno, y entre los artículos que solicita modificar está el 117, que –¡oh casualidad!- requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley, y los enumera. Entre ellos estaba y está en el Reglamento Interno actual la doble lectura para la modificación del Código Tributario, y entre las modificaciones que propone el legislador De Loredó a éstos no los modifica, sino que los mantiene.

El proyecto de él sostiene que se debe mantener la doble lectura para el Código Tributario, es más, va más allá y agrega: “Para las leyes referidas a la privatización, concesión y/o estatización de obras y servicios públicos”. Insiste en esa doble lectura, que hoy es palabra muerta. Aunque reconoce que el artículo 106 de la Constitución provincial exige la doble lectura para el Código Tributario, el legislador entiende que es a los fines de otorgar garantías a los ciudadanos. Como en el caso de esta ley en tratamiento se estaría eximiendo a las empresas beneficiando al ciudadano, atento a los pedidos de urgencia de los intendentes –que yo corrijo, de un intendente, el de la ciudad de Córdoba-, él considera que no es necesario mantener esta garantía de la doble lectura y, en consecuencia, solicita el tratamiento sobre tablas.

Con muchísimo respeto, le digo al legislador: ¿quiénes somos nosotros para considerar y/o modificar las garantías que expresamente establece la Constitución de la Provincia de Córdoba? ¿Cómo nos vamos a atribuir semejante facultad, que porque consideramos que se está beneficiando, no hace falta la doble lectura? Que yo sepa, al igual que quien habla, es legislador provincial, no convencional constituyente.

No hay manera de justificar este pacto, este acuerdo. No saben cómo justificarlo y por eso esgrimen fundamentaciones jurídicas inesperadas, ajenas al apego al Reglamento y a la Constitución. Como expresa el legislador García Elorrio, lo que se pretende no es beneficiar a nuestros comprovincianos, sino pagar la campaña del Intendente de la ciudad de Córdoba. Esta ley no beneficia a los ciudadanos de la Provincia, lo único que beneficia son las pretensiones y aspiraciones políticas del Gobernador De la Sota y del Intendente Mestre.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: ¿qué se supone que va a pasar si aprobamos este proyecto sin hacer la doble lectura? Hay un dato que no ha salido en el debate pero hay que tenerlo muy en cuenta: todas las empresas a lo largo y a lo ancho de la Provincia que hayan estado pagando Ingresos Brutos por este tipo de actividades van a hacer planteos legales. Entonces, no son 200 millones de pesos, ¿está claro?

Si se estudian un poco los principios generales del Derecho Fiscal, esta norma que vamos a aprobar hoy va a tener efecto sobre otras relaciones jurídicas, incluso algunas ya consolidadas.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en verdad, en este pedido de tratamiento en los términos planteados por la Unión Cívica Radical, si bien lo ha aclarado su presidente de bloque y ha sido apoyado por el Foro de Intendentes que, imagino, compartirán algún tipo de preocupación, más allá de todos los argumentos, idas y vueltas del otro lado de una oposición a la que fraccionadamente me referiré en unos instantes, cuando se hace hincapié en las cuestiones formales de esta manera, señor presidente, debo hacer referencia a que esta Cámara aprobó, con el voto de quienes han cuestionado este proyecto y las formas, la Ley 10036/11 que eximió de impuestos a los eventos culturales, y se hizo en una sola lectura. Así, el 28 de diciembre de 2011 se aprobó la Ley 10032, que establece la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción -aprobación en una sola lectura. Basta remitirse a la versión taquigráfica para ver cómo la legisladora Del Boca del Frente Cívico decía que adelantaba el voto positivo de su bloque a estos efectos. Por otro lado, el 19 de noviembre de 2014, el Régimen de Promoción para la creación de Micro y Pequeñas Empresas, recibió también por parte del Frente Cívico igual tratamiento.

Por todo esto, parece ser que de acuerdo al nombre y apellido que tenga el proyecto de exención en cuestión será la postura que a este respecto mantengan distintos bloques, fundamentalmente el del Frente Cívico. Podría enumerar otros casos que tengo sobre mi banca, pero no vale la pena señor presidente, ya que en estas cuestiones no hay peor sordo que el que no quiere oír y, además, porque ya han tomado para sus argumentaciones una definición política que, sinceramente, no nos incumbe. Lo que sí nos incumbe es la visión particular y estratégica que siempre Unión por Córdoba en el Gobierno ha tenido respecto del tratamiento de la basura. Una visión que ha abandonado definitivamente la posibilidad de que los Estados, cualquiera sea el tamaño de los mismos, puedan resolver por sí mismos este complejo, difícil y costoso problema. Es por esto que nosotros hemos apostado a enfrentar la solución de este gran problema en forma conjunta, es decir, entre el esfuerzo estatal y los capitales privados.

Por tal motivo vamos a apoyar esta iniciativa, que no es la única que ha beneficiado a distintos municipios y que beneficiará –con razón, como aquí se ha dicho, en el futuro- a numerosos municipios de la Provincia de Córdoba.

Ahora, señor presidente, fíjese la casualidad: cuando se mencionan municipios más grandes, salvo uno como es el de la Ciudad de San Francisco que pertenece a nuestro signo político, ninguno

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

puede argumentar con seriedad que sea beneficiado; San Francisco cuenta bajo el mismo concepto -el Estado en colaboración con una empresa privada- con otra empresa que nada tiene que ver con la que opera en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto o Río Tercero.

Algunos han hablado apuntando a que esto es un negocio de las empresas, olvidando que cuando uno, a través de los mecanismos que son habituales, hace participar a las empresas, las empresas privadas vienen a maximizar sus beneficios; entonces no nos vengan a hacer cargo a nosotros, al bloque de Unión por Córdoba, de cuál es la negociación, la calidad de la misma y sus resultados, que cada administración municipal ha ejercido, ejerce o ejercerá en el futuro.

Fíjese, señor presidente, que esta Ciudad de Córdoba, cuando el legislador Luis Juez gobernaba, tenía un contrato con Cliba, del Grupo Roggio. y se renovaba todos los meses; pero parece que nadie se daba cuenta de lo oneroso que era para los cordobeses. Seguramente en algún estudio jurídico de esta Ciudad de Córdoba se habrá analizado la cuestión de los costos, pero nosotros no lo supimos, como tampoco lo supieron los ciudadanos de Córdoba.

¿Cómo terminó esta historia? Terminó estatizándose el servicio con los resultados en materia de calidad de prestación que todos conocemos y con la denuncia -fíjese, si es por "denuncias", señor presidente- de que esa rescisión y todo el contrato en los términos que acabo de plantear había tenido como objetivo, entre otros, financiar la campaña del entonces Intendente Juez.

Alguno me dirá que me contradigo con lo que los concejales de Unión por Córdoba y del Frente para la Victoria de la ciudad de Río Cuarto han planteado oportunamente respecto del tratamiento de este difícil tema, sobre todo en materia de costos y su actualización, de prestación del servicio y de su control. Pero no, señor presidente, esa es la tarea de los legisladores ríocuartenses por la que dieron pelea, expusieron sus argumentos y cuestionaron en un cúmulo de aspectos el contrato que se estaba por firmar. Pero para nada ello me involucra a mí ni al conjunto de los legisladores en esta decisión, por más que la oposición esgrima argumentos, según les cuadre, sosteniendo que se vulnera o no la institucionalidad o la Constitución que ellos, cuando les tocó gobernar en distintos niveles estaduales, no respetaron.

No nos vengan a hacer cargo de esta decisión que, sin ninguna duda, va a beneficiar al ciudadano común y no, como se ha dicho, a las empresas. Es como lo digo porque si este contrato continúa en la Ciudad de Córdoba será por una vía que no es el del llamado a licitación, por lo tanto, seguirá otorgándose con prórroga y, por lo tanto, sin pagar el Impuesto de Sellos.

Pero, claro, señor presidente: la histeria a la que acuden algunos legisladores o legisladoras del Frente Cívico pareciera no tener otra explicación, cual es que se les escapa la soñada alianza, producto de un pedido de un municipio concreto y de una decisión del Gobierno y del bloque de Unión por Córdoba de acompañarlo.

Esta mañana un legislador me citaba a un Premio Nobel de Economía -creo que fue usted, señor presidente- que decía que cuando se habla de ciertas situaciones como, por ejemplo, cuando uno asiste a un almuerzo y no paga, pero cree que porque uno no lo pagó nadie lo hace, precisamente, tiene que saber que siempre hay alguien que lo paga. Efectivamente, el que lo pague o no lo pague el pueblo, entre otras cosas tiene que ver con la calidad de negociación que cada municipio autónomamente debe llevar adelante con las empresas que prestan el servicio que, reitero, reconozco que son de una dificultad sobradamente probada aquí y en cualquier lugar del mundo.

Entonces, que no vengan a hacer cargo al bloque de Unión por Córdoba cuando nosotros, lejos de aprovechar este tipo de situaciones para sacar partido, acudimos una vez más a que serán nuestros concejales, nuestros dirigentes, nuestras fuerzas aliadas en cada uno de los lugares quienes deberán dar cuenta, denunciar y dar pelea política para demostrar que quien está gobernando una ciudad de mayor o menor en importancia y envergadura, no merece seguir teniendo el apoyo del pueblo, en este caso de Córdoba.

No nos va a encontrar a nosotros cediendo ante esta sarta de acusaciones, entre las cuales he escuchado la bajeza de comparar esta cifra con lo que se ha destinado, en principio y en un rubro que tiende a paliar situaciones individuales crediticias, con lo que aquí se está discutiendo hoy.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Hago una pequeña digresión. Todos sabemos que la reconstrucción de las Sierras Chicas va a necesitar –como ha quedado demostrado- la unión del trabajo de los niveles estaduales nacional, provincial y municipal y de las ONG –que felizmente pueblan la geografía de esta Provincia- que son muy solidarias. Comparar esto con esta cifra, cuando todos saben la friolera que va a costar la reconstrucción tanto al Gobierno provincial como a los cordobeses, es de una baja política muy triste.

No vengán a endilgar y a canalizar a través nuestras situaciones que indudablemente tienen que ver hasta con problemas estructurales. Parece que el agua y el aceite quieren no seguir juntándose en la vida, por algo será.

Algunos legisladores o legisladoras del Frente Cívico –esto nos parece grave- deberían pedirle doble lectura a su jefe político para que no esté, en primera lectura, diciendo que quiere ser senador, al otro día que quiere ser Gobernador, al otro día que se quiere bajar porque no sé qué cosa, apostando claramente a lo que imaginamos ya podría ser un Gobierno que trate no ésta sino otras cosas muchísimo menores en este tironeo, en esta falta de convicción y de unidad, de concepción y de acción. No nos hagan cargo a nosotros de esto sino de la valiente decisión política del bloque de Unión por Córdoba de tratar, frente al pedido de un municipio en problemas, este tema.

Señor presidente: solicito que dé por cerrado el debate y someta a votación el presente proyecto.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión al proyecto tal como fue presentado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.

En consideración el proyecto 16177, tal como fuera despachado por la Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 16126, 16128, 16135, 16162, 16173, 16176, 16178, 16180, 16181, 16183, 16184, 16188, 16190, 16191, 16192 y 16193/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo en los proyectos 16162 y 16176/L/15.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.

Tiene la palabra el legislador Presas.

Sr. Presas.- Señor presidente, señores legisladores: a esta hora no tendría que estar aquí, me quedé para tratar este tema. En este momento está la Comisión de Emergencia Provincial junto con los intendentes de las Sierras Chicas en una reunión importante en la Casa de Gobierno, pero quería transmitirles algunas sensaciones que tengo de lo ocurrido en las Sierras Chicas y ver por ahí proyectos de declaración, que sin duda dentro de nuestras posibilidades los vamos a transmitir a todos los habitantes de nuestra región que están sufriendo este castigo de la naturaleza.

Como primer tema, quería pedirle al señor presidente un par de correcciones en la fundamentación. Este desastre fue el día 15 y no al 14 de febrero, como dice el proyecto, les pediría que modifiquemos eso porque tiene que ver con alguna fecha que durante mucho tiempo desgraciadamente tendremos en la memoria. En segundo término, dice “poblaciones pequeñas que han sufrido este hecho”; les quiero decir que son nueve municipios que involucran a más de 190 mil habitantes, en un departamento de más de 350 mil habitantes y, en ese marco, desde Villa Allende, una ciudad de 40 mil habitantes que hoy está tratando de empezar a caminar, de un Mendiolaza donde El Vergel y Los Cigarrales han casi desaparecido; de una comunicación, de una ruta fantástica que teníamos entre Mendiolaza y Villa Allende que desapareció, igual que de Mendiolaza a Unquillo; de un Unquillo, donde lugares como Villa Forchieri y Gobernador Pizarro están hoy casi separados del resto de los habitantes de la ciudad; ni hablar de Río Ceballos, donde el margen del río de tener diez a quince metros fue a 150 metros, arrastrando con ello ilusiones hasta de los propios habitantes de nuestra región, y de ahí para arriba en Salsipuedes; en Agua de Oro, donde quedó un solo puente y el resto se los llevó todo el agua; el Cerro Azul, donde un día y medio la gente no se pudo comunicar con el centro de Agua de Oro, gente con diálisis, que ni siquiera podíamos bajar con helicóptero para llevarla. ¡Este es el tamaño del desastre que nos está ocurriendo en nuestra región!

No quiero ser partícipe como un mero comentarista de esta situación que ustedes verán por los diarios o por la televisión; nosotros, los legisladores de ese departamento, somos parte activa de esto que está ocurriendo. Por eso, apenas termine me voy a esa reunión, porque creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros; no puede ser solamente el Poder Ejecutivo, las ONG o la gran cantidad de gente que hoy está ayudando sin pedir nada, sin decir ni siquiera quiénes son. Por eso, el proyecto de declaración es interesante, pero me parece que nos falta involucrarnos un poquito más.

Por eso, señor presidente, señores legisladores, quería plantear hoy dos temas que los dejaré para que ustedes los analicen, pero, me parece que es fundamental que tomemos conciencia de lo que nos está ocurriendo en la Provincia de Córdoba. Primero, quiero pedirles que presentemos un proyecto conjunto entre todos, rápidamente, instruyendo a nuestros senadores nacionales por Córdoba e invitando a nuestros diputados por Córdoba a que presenten un proyecto en el Congreso de la Nación para que la Nación involucre a Córdoba y a esta región como zona de desastre, para tener realmente más soluciones para muchos vecinos, para muchos comerciantes, para mucha gente que ha perdido su vivienda, como recién una chica salteña, que está viviendo en Villa Allende que me dijo que alquila la casa y se la llevó el agua, no tiene casa y encima le llevó la casa que alquilaba, está viendo qué hará con sus tres hijos. Esta es la realidad.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Reitero: no tenemos que ser más comentaristas; algunos me llaman y me dicen: “¿cómo anda la cosa allá?” Sería bueno que estemos cerca de allá, porque cada vez estamos más lejos de la gente, resuelven ellos y nosotros estamos más lejos de la gente que creemos representar.

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Por eso, y porque he sufrido en carne propia esto, quiero decirles que he tomado la decisión personal –obviamente- de donar mi dieta porque, por pequeñita que sea dentro del volumen infernal de lo que va a costar reconstruir las Sierras Chicas, si todos ponemos un poquito –como lo está haciendo gente que no tiene nada, que pone aunque sea un poco de leche o de agua- es muy probable que logremos reconstruirlas antes.

Quiero dejar constancia, señor presidente, que mi dieta va a ser donada al Comité de Crisis para que entre todos podamos resolver lo que nos está ocurriendo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.

Sr. Clavijo.- Gracias, señor presidente.

Voy a tratar de ser medido en las cosas que voy a decir.

Creo que todos los que estamos aquí sabemos que el que quiera sacar algún tipo de rédito político de lo que está pasando en las sierras se va a equivocar -y se va a equivocar feo-, pero eso no nos exime de que discutamos y trabajemos, con decisión, para aportar las soluciones de fondo que están a nuestro alcance, y que desde hace tiempo es nuestra obligación dar.

En un simple repaso, que cualquiera de nosotros puede hacer “googleando” –como dicen los chicos-; podemos ver que es cierto que las precipitaciones que hubo fueron de gran magnitud, pero no es la primera vez que pasan estas cosas en las Sierras Chicas y en distintos lugares de la Provincia.

En febrero de 2007, Unquillo y el centro de Villa Allende sufrieron la caída de precipitaciones muy importantes para aquella época: 100 milímetros en 14 horas -esta vez cayeron 300 milímetros en 12 horas. En ese entonces, el titular de Defensa Civil -de apellido Cuaranta- manifestó: “En la Provincia de Córdoba, el régimen de lluvias ha cambiado; nuestros veranos han pasado a ser de tormentas y precipitaciones fuertes en un corto lapso de tiempo; habrá que adaptar la Provincia a esa nueva realidad”. Febrero de 2007.

Sólo voy a decir esto, porque creo que me equivocaría si usara este tema para empezar a hablar, en este momento, de cosas que ya se han hablado en esta Legislatura.

Nos hemos tomado la molestia de ver los distintos proyectos que sobre el tema de las inundaciones en Sierras Chicas se han llevado adelante, que han sido varios, de distintos bloques y en distintos períodos -incluso en períodos anteriores a este, por parte de legisladores de la zona, de Unión por Córdoba de la zona-, es decir que este no es ajeno; lo que sucede es que cuesta tomar las decisiones que hay que tomar.

Todos sabemos que en esa zona ha habido un crecimiento anárquico en distintos temas. Nosotros –y a esto lo digo no porque el legislador Presas haya hablado recién sobre el tema, porque no sabía que se iba a tratar-, en horas de la mañana, en forma verbal al legislador González y en forma escrita al Ministro López, les manifestamos que era nuestra decisión plantearles a los distintos bloques de la Legislatura que nos pusieran a trabajar a la brevedad para tomar una serie de disposiciones, muy concretas, para ver si las podíamos aprobar la semana que viene.

Lo que voy a mencionar no es un proyecto de ley, porque no lo hemos presentado -queremos trabajar con el resto de los bloques en esto-, pero estamos convencidos de que tenemos que avanzar en lo que tenemos hoy a mano, en lo que podemos hacer hoy; por ejemplo, suspender por el término de

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

un año todas las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Ambiente para desarrollos inmobiliarios, comerciales y urbanísticos, públicos y privados, que impliquen acciones de desvío –o sea, no es cualquier acción-, embalsamiento, fijación de líneas de ribera o cualquier otra intervención en cursos de agua, cauces secos, en correntía y reservorios de agua en las zonas de los cordones montañosos de Sierras Chicas correspondientes a los Departamentos Colón y Punilla. En realidad, creemos que esto habría que hacerlo extensivo a la provincia pero “de a rodajas se come la mortadela”, es decir, empecemos por este tema que es acuciante hoy.

Suspender por el término de un año todas las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Ambiente para la tarea apertura de calles, nivelación de terrenos, desmonte, cortafuegos y cualquier otra actividad que modifique la superficie del suelo, según el artículo 5º de la Ley 9814, Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, circunscripto nada más que a las zonas rojas. No anular sino suspender.

Por último, la otra idea, el tercer aspecto es solicitar al Poder Ejecutivo que disponga la revisión y el control de los permisos y estudios de impacto ambiental que se han otorgado a aquellos desarrollos comerciales inmobiliarios y urbanísticos que superen las 5 hectáreas -como fija la ley aprobada el año pasado-, a fin de corregir aquellos aspectos que puedan representar deterioro de cuencas y modificación de cursos naturales de agua y en correntías de la zona y provocar deslizamiento de agua, tierra y roca por la ladera de la montaña. Esta última frase no me pertenece, sino que la tomé de un informe que realizó, a pedido de la Municipalidad de Unquillo, la licenciada Barchuk a mediados de 2013, hace un año y medio. Específicamente alertaba que en las zonas de Mendiolaza, Unquillo, Villa Allende y Río Ceballos se iban a producir deslizamientos, no solamente por la forma en que habían avanzado las construcciones urbanas sobre la ladera de la montaña sino porque en ese entonces había sucedido un gran incendio.

Quiero expresar que estas son las cosas que hoy tenemos la obligación de discutir acá, y si queremos asumir la responsabilidad que tenemos, también es la hora de empezar a discutir qué respuestas podemos dar.

Esto no es “loco”, porque todos vimos las imágenes y de una u otra manera fuimos, porque todos estuvimos allí, algunos más, otros menos, todos tenemos amigos o conocidos y todos estuvimos en estas zonas en estos días. Todos vimos y sabemos que llevará meses arreglar las carreteras, las rutas, los puentes y los caminos secundarios; por lo tanto, estas medidas no son alocadas. De hecho, muchas cosas se paralizarán estos meses, entonces, usemos este tiempo para revisar lo que se ha hecho. No vamos a entrar a discutir las responsabilidades de lo que se hizo, pero sí estamos obligados a corregir lo que está mal hecho.

Personalmente, estuve en zonas altas de Candonga y vi cómo se desviaron y embalsaron dentro de countries cursos de arroyos, y eso va a terminar mal porque todo lo que se le ponga en medio a un cauce, tarde o temprano termina mal. Entonces, exijamos que se corrija.

Creo que la mayoría de ustedes no sabe que el Consejo de Ordenamiento Territorial, que funciona a raíz de la ley aprobada el año pasado, del que varios legisladores somos integrantes junto con el Foro de Intendentes y la totalidad de los ministros, en la última sesión del año pasado resolvimos abocarnos a trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio, como lo fija la ley, y se definió, en ese entonces -no por lo que pasó ahora sino con anterioridad- trabajar sobre el tema Sierras Chicas. Debemos acompañar ese trabajo para definir ese ordenamiento territorial, con la suspensión de estas cosas.

Insisto, no hablo de avanzar sobre responsabilidades, ni de llevar cosas a la Justicia, ni de denunciar a nadie, sino que pido que se revise lo que se ha hecho mal, que se corrija, que no se avance en lo que se está haciendo mal en lo que se refiere al avance del agua en nuestras Sierras Chicas. Porque paradójicamente, después de toda el agua que ha caído los problemas de abastecimiento de agua van a seguir existiendo en esa zona, porque el problema es de las napas que están debajo de la tierra, no de toda el agua que ha corrido hoy por encima.

Es nuestra obligación; es cierto que nos duele lo que ha pasado en Sierras Chicas, es cierto que sentimos como propio lo que ha estado pasando ahí. Tuvimos una muy buena experiencia con la Ley de

Ambiente, repitamos en forma urgente ese tema. Hay estudios de distintos profesionales, investigadores, biólogos, geólogos, que pertenecen a las universidades y que están radicados en nuestra provincia. Sobre ese tema no tenemos que andar inventando nada, allí hay medidas concretas que se pueden llevar adelante desde el Gobierno para acompañar lo que se está haciendo también desde el Gobierno, a eso lo vemos nosotros. ¿Se van a volver a reconstruir las rutas en aquellos lugares donde el curso de agua “se las llevó puestas” porque se estaba invadiendo lo que es el curso natural de las aguas?, ¿se van a volver a construir los puentes en esos lugares? En las imágenes que vemos de Villa Allende, de Mendiolaza, de las casas que “se llevó puestas” el agua, vemos que estaban al costado de los arroyos y de los ríos. El Gobierno ¿va a volver a construir las casas en esos lugares? ¿No es el momento de dar esta discusión hoy, acá, entre nosotros? ¿No es el momento de discutir esto con los funcionarios del Poder Ejecutivo? Son cosas que podemos hacer.

Nosotros, en el día de mañana vamos a estar cursando estas tres ideas –ni siquiera vamos a armar un proyecto de ley– para que las discutamos los bloques y ver si podemos arribar a una posición común donde le estemos dando herramientas, no a la Legislatura, al Ejecutivo, al Ministerio, para que pueda empezar a meterse en estos temas que no son fáciles. Porque acá ha habido desarrollos que se han hecho con permisos y autorizaciones otorgadas. No va a ser fácil este tema, pero hay que hacerlo.

Si ustedes “googlean” de diciembre para acá lo que ha estado pasando en la Provincia –acá hay legisladores de todos los departamentos– verán que en todos los departamentos de la Provincia –y particularmente en nuestras serranías– ha habido inundaciones, donde ha llovido 100, 150 ó 200 milímetros, en períodos que van de 5 a 15 horas, y ha habido anegamientos, deslizamientos de rocas y de tierra, como las que pasaron en toda la zona del Departamento Colón.

Si asumimos la responsabilidad que tenemos como legisladores en esta hora, esta es nuestra tarea; después cada uno se sumará a trabajar en las tareas de solidaridad que considere. Pero nuestra tarea principal, nuestra obligación como legisladores es esto. Si no nos ponemos a trabajar en estos días, en estas cosas, no vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer en este momento con lo que ha pasado en Sierras Chicas.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Gutiérrez).– Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.– Señor presidente, disculpe lo extemporáneo, pero es para dejar asentado nuestro voto negativo respecto de los proyectos 16162 y 16166.

Sr. Presidente (Gutiérrez).– Queda consignado su voto, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Roffé.

Sr. Roffé.– Señor presidente, respecto del proyecto que se aprobó, el 16184 –donde solicitamos a Vialidad Nacional la habilitación de un sector de la autovía que comunica la terminación que viene de Santa Fe, desde la localidad de Josefina hasta el nudo vial que se ha construido sobre la Ruta 158– queríamos manifestar lo siguiente: como ese tramo está terminado desde hace tiempo, y hace aproximadamente 6 meses hubo un problema en uno de los puentes que ya ha sido solucionado, pedimos que se habilite definitivamente ese tramo de la autovía porque están ocurriendo accidentes, picadas de motos, robos y una serie de irregularidades que están trayendo problemas a la vida comunitaria de San Francisco; y, por otro lado, estando eso ya concluido, determinaría que la gran cantidad de camiones que pasa por San Francisco se dirijan por el desvío de la autovía, lo que facilitaría su circulación.

Por estas razones, señor presidente, solicito que Vialidad Nacional, definitivamente, habilite ese tramo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.

Sra. Chiofalo.- Señor presidente: haré un breve resumen del proyecto 16162, por mí presentado el miércoles pasado y al que –lo vemos con mucha alegría– se ha sumado el proyecto 16176, presentado por el legislador De Loredó, en nombre de la Unión Cívica Radical.

El presente proyecto pone de manifiesto lo que estamos viviendo hoy todos los argentinos, y nosotros en particular, desde nuestro lugar, trabajando como legisladores para nuestra Provincia y haciendo uso de la gran posibilidad que tenemos de hablar en representación del pueblo de Córdoba.

En este momento, a un mes de la muerte del fiscal Nisman, se está llevando adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “la Marcha del Silencio”. Esta Legislatura ya se había pronunciado al respecto a través del proyecto 16091 –que presenté el 3 de febrero de este año–, emitiendo en su conjunto la declaración 16039, de gran importancia, que establecía específicamente su profunda preocupación por la muerte del Fiscal de la Nación Natalio Alberto Nisman –hecho lamentable en la vida democrática de nuestro país–, mientras llevaba adelante la investigación de la causa “AMIA”, de gran trascendencia institucional.

Estos hechos, señor presidente, han marcado un antes y un después en la vida institucional y de la sociedad argentina en su conjunto. Creo que absolutamente todos pasamos aquel día por sucesivas etapas: la sorpresa, la incredulidad y la falta de confirmación rápida –que se dio muy tarde, a la madrugada– sobre lo sucedido en el departamento del fiscal Nisman.

Esto nos sorprendió a muchos argentinos que estábamos intentando conocer, a través de los medios de comunicación, qué estaba pasando con este valiente y heroico fiscal de la Nación, que había llevado adelante la investigación de uno de los atentados terroristas más tremendos que ha sufrido la Argentina –junto con el de la Embajada de Israel– y Latinoamérica.

Ese fiscal, que había elaborado una grave denuncia en contra del Gobierno nacional, había sido nombrado –es importante recordarlo– por el ex Presidente Néstor Kirchner. Asimismo, ese fiscal, que también había acusado al ex Presidente Menem y a otros funcionarios, tenía una orden de muerte, no sólo de lo que podemos denominar “terrorismo internacional” sino del propio Estado de Irán.

A todos esos factores debemos tenerlos en cuenta, y esta muerte del fiscal, en extrañas condiciones, se produce el día antes de asistir al Congreso nacional a los efectos de presentar ante los diputados de la Nación las pruebas pertinentes a la grave denuncia que había formulado. Esto ha marcado un antes y un después, ha llevado a que no solamente la sociedad se conmoviera sino a que también los cimientos de la Justicia en nuestro país lo hicieran.

Hoy sus colegas, un grupo de valientes fiscales federales nacionales, convocaron a esta “Marcha del Silencio”, marcha que no es en contra de nadie, que únicamente tiende a hacer lo que no hicimos –debemos reconocerlo como Estado, como pueblo que quizás no ha sabido estar a la altura de las circunstancias–: rendir el debido y merecido homenaje al fiscal Nisman, donde no solamente podamos transmitir las debidas condolencias a su familia –cuya ex mujer, la jueza Arroyo Salgado, y sus hijas están participando en este momento de la marcha– sino también plantear que esto es motivo de duelo nacional.

Este fiscal valiente murió por la causa que llevaba adelante, este fiscal valiente murió en defensa de la Justicia y por una Justicia libre e independiente. Creo que es eso lo que está reflejando la marcha y me parece que es algo que nos tiene que unir absolutamente a todos los argentinos, más allá de cuál pueda ser la carátula de esa muerte terrible que ha acontecido en nuestro país, de ese magnicidio, de ese verdadero atentado que ha sufrido nuevamente el pueblo argentino; como bien diría la gente de la DAIA y de la comunidad: lamentablemente el fiscal Nisman es la víctima número 86 del atentado a la AMIA.

Simplemente, señor presidente, quiero destacar algunas adhesiones y palabras de gente realmente muy representativa y que personalmente he sentido que refleja lo que quizás muchos sentimos y lo que quizás muchos argentinos sienten en este momento.

En primer lugar, las palabras de la hermana Marta Pelloni, que hoy se encuentra marchando. Marta Pelloni, la madre de las marchas de silencio en la Argentina, una gran luchadora por la verdad, la Justicia y contra la impunidad; una gran luchadora en la materia de trata de personas y en diferentes causas que hacen a la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

¿Qué dice Marta Pelloni de esto?, ¿qué dice Marta Pelloni de lo que hicimos antes y después de la muerte del fiscal Nisman? Con respecto al “antes”, diría que una de las principales cuestiones que nos debemos plantear es que “al fiscal Nisman lo dejamos solo, al fiscal Nisman no lo cuidamos, debería haber sido la persona más cuidada, protegida y respaldada de la República Argentina, pero lo dejamos solo”. ¿Y qué dice Marta Pelloni del “después”? Resulta que “después nos dedicamos a defenestrarlo, a cuestionar su denuncia y todo aquello que había llevado adelante”. Ahora, me pregunto: este fiscal que durante más de 10 años estuvo al frente de la causa AMIA, ¿cómo es que antes que fuera a denunciar al Gobierno nacional jamás había sido cuestionado y ahora sí? ¿Cómo puede ser que este hombre calificado como brillante, respaldado por todos los sectores, de buenas a primeras pasó a ser un simple “pelele” sujeto a los designios de terceros que le escribieron una denuncia?

Marta Pelloni dice algo muy importante: “No sólo desacreditan a Nisman sino que con esto están desacreditando a todos aquellos que buscamos la verdad y la justicia”.

También es muy importante la adhesión que realiza la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina; la adhesión de la DAIA, a nivel nacional y provincial; la adhesión de diferentes magistrados: podemos hablar de la Asociación de Magistrados a nivel nacional, de fiscales. En verdad, yo me quedo con algunas palabras, como por ejemplo, las del Fiscal Federal Provincial Lozada, que desde un primer momento planteó su adhesión a la marcha, y ante los cuestionamientos sobre por qué se participaba o no, Lozada dice: “Es una marcha, no la creación de un partido político”.

Otra Fiscal Federal que realmente es emblemática en la lucha por los Derechos Humanos y también en relación a su total independencia de cualquier interés político en el tema, quien ha manifestado su adhesión, es Graciela López de Filoñuk.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Simplemente nombro algunos, porque hubieron otros que dijeron una cosa y después habrán recibido algún llamado y plantearon otra.

También quiero manifestar cuál es la posición de nuestro Gobernador, que ha planteado concretamente, que más allá de su voluntad primigenia de estar presente en la Marcha del Silencio, él ha preferido quedarse en Córdoba para cumplir con su tarea y su deber, más allá de que acompañe espiritualmente, hasta que el último evacuado por las inundaciones en la Provincia vuelva a su casa, pero tenemos el acompañamiento y representación de los diputados nacionales por Córdoba: Schiaretta, Caserio y Blanca Rossi.

Hay mucha gente que realmente se ha manifestado y me parece que debemos compartirlo, como es la máxima autoridad religiosa del catolicismo en Córdoba, Arzobispo Nánquez, quien plantea que ésta es una situación dolorosa y le transmite las condolencias a la familia, invita a la Iglesia Católica a rezar por él y plantea a la comunidad la búsqueda de la verdad, la justicia y la construcción de la paz.

Como peronista quiero transmitir un mensaje que me pareció muy importante, que es el de la compañera Claudia Rucci, quien dijo que este es el crimen político más importante y terrible desde la muerte de su padre. Yo creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión.

También quiero transmitir que esta Marcha del Silencio, convocada por la comunidad judicial nacional ha sido replicada a nivel internacional y que, incluso, por cuestiones de horario se ha anticipado, ante diferentes embajadas argentinas en Francia, Estados Unidos, en distintos países europeos y africanos. En diferentes lugares del mundo argentinos y no argentinos están adhiriendo a esta marcha, se están solidarizando con la memoria y están exigiendo memoria, verdad y justicia, y también el debido reconocimiento a la memoria del fiscal Nisman.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Para terminar, revisando algunas cuestiones, recuerdo que esa noche –que podemos decir la pasamos en vela-, escribí en mi twit: “Después de la muerte de Nisman hay un antes y un después en la política y en la sociedad argentina, que haya verdad y justicia para el fiscal Nisman”.

Me gustaría compartir con ustedes unas palabras que reflejan esto mejor que ninguna, y que pertenecen a alguien que tiene toda la autoridad moral por haber vivido procesos de lucha contra las mafias y terrorismo de Estado, uno de los fiscales propulsores del “mani pulite” italiano que apoya la marcha del 18 de febrero, Antonio Di Pietro, que en una carta escribió lo siguiente: “A la familia Nisman, a la sociedad civil argentina: la trágica muerte de mi colega Alberto Nisman me ha generado un sentimiento de profunda conmoción y tristeza. Participo, con sinceros sentimientos de cercanía, del dolor de sus familiares y en especial de sus pequeñas hijas. Envío también mi sincera solidaridad a la sociedad civil argentina, que encontrará, estoy seguro, la fuerza y el coraje para resguardar la institucionalidad, el imperio de la legalidad y la búsqueda de la verdad.

La muerte y la corrupción no pueden convertirse en fenómenos cotidianos. Esto se evita cuando se respeta el principio de la división de poderes y se castiga severamente la corrupción y la ilegalidad. La conciencia colectiva y una enérgica toma de posición de la comunidad a favor de la legalidad son condiciones necesarias e indispensables para el respeto de la independencia de poderes y el combate a las mafias.

A mis colegas, los fiscales argentinos que trabajan en la búsqueda de la verdad y el respeto de las normas constitucionales, les transmito todo mi apoyo y comprensión. He vivido muy de cerca la tragedia de la muerte de héroes civiles como los jueces Falcone y Borsellino –dos figuras símbolo de la lucha contra la mafia– que, como el fiscal Nisman y tantos otros en el mundo, tuvieron el coraje de cumplir con su deber por el bien de la comunidad.

Acompaño con mi corazón la marcha silenciosa del día 18 para homenajear a un héroe y a la sociedad civil, que no debe tener dudas de que vivir en el respeto de la legalidad, la defensa de la verdad y el combate a la impunidad y a la corrupción no es inútil”. Firma Antonio Di Pietro, ex fiscal italiano, precursor del proceso “mani pulite”.

Agradezco el tiempo que me han dispensado y quiero cerrar simplemente transmitiendo, en nombre de todos, las condolencias, el respeto y el deseo del debido reconocimiento a la memoria de un fiscal de la Nación que luchó por la justicia y la verdad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: no es por este tema, ¿puedo hacer uso de la palabra? Esto ya se votó.

Es por una cuestión personal. Recién se me acercó el legislador Busso, manifestándome que la semana que viene iba a hablar de mi jefe político, el doctor Juez.

En verdad, no estoy acostumbrada a estos “aprietes” en el recinto y...

Sr. Presidente (González).- Legisladora, las conversaciones tuyas con el legislador no hacen al tema.

-La legisladora Leiva continúa hablando fuera de micrófono.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 14200, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

A la señora
Presidenta de la
Legislatura de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S / D

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 14200/L/14, proyecto de ley iniciado por la legisladora Cintia Frenchia, por el cual se declara la emergencia ambiental en todo el territorio provincial por un plazo de veinticuatro (24) meses.

Los hechos naturales acaecidos durante el último fin de semana han demostrado la urgencia de declarar la Emergencia Ambiental a través de la Ley que presentáramos en junio del año pasado. Tanto la autorización indiscriminada de la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios como la tala de árboles y el desmonte de la flora autóctona se han convertido en la principal causa que impide llevar adelante previsiones que permitirían una baja afectación frente a los hechos climáticos que son, por supuesto, poco previsibles.

Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Para una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente: en verdad, sí se hacía necesario el pedido de reconsideración de este proyecto que la compañera Cintia Frenchia presentara en junio del año pasado, retomando, además, las palabras del legislador Clavijo que se refería a la necesidad de que esta Cámara -que en este momento está bastante vaciada- tuviera en cuenta lo que está sucediendo fuera de la Legislatura, con montones de familias que han sufrido pérdidas materiales, económicas y personales, no sólo de familiares y amigos sino también de recuerdos y un montón de cosas que no se recuperan. Quería pedir el tratamiento de este proyecto de ley ya que el mismo estaba planteado para que, entre otras cosas, se suspendan y queden prohibidas por el plazo de 24 meses las habilitaciones de emprendimientos inmobiliarios, comerciales y urbanísticos a gran escala y de alto impacto ambiental.

Entre otras cosas, este proyecto de ley presentado en junio de 2014, es decir, mucho tiempo antes de estos acontecimientos vividos el fin de semana pasado, planteaba la prohibición completa de la

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

tala de árboles y el desmonte de flora autóctona en todo el territorio provincial, la prohibición de la explotación agropecuaria en las zonas afectadas por incendios, inundaciones, crisis hídricas y demás inclemencias climáticas, exceptuando a los campesinos y a la subsistencia familiar, tiene una serie de planteos y artículos que estaban anticipando tristemente lo que hemos visto este fin de semana.

No puedo sentir más que indignación cuando se habla de catástrofe natural, o cuando el Gobernador De la Sota habla de un “tsunami caído del cielo”, o cuando otros legisladores, con gestos compungidos, se refieren a las pérdidas de cientos de familias en los municipios que dicen representar. Porque acá no se puede hablar de catástrofe natural, ya que ha habido una política deliberada durante 15 años de Gobierno provincial, que ha tendido y tenido una orientación precisa política, económica y social que fue la de garantizar grandes negociados en la Provincia, como el de la soja, que implica la extensión de sus fronteras para el monocultivo y para todo lo vinculado al agro-business, ha significado permitir instalaciones como la de Monsanto –a la que también nos opusimos desde el Frente de Izquierda- o la aprobación de una ley como la Ley de Bosques que permitía avanzar en el desmonte y en la tala indiscriminada.

Entonces, esta orientación social, que ha tenido, además, el objetivo de beneficiar y garantizar...

Sr. Presidente (González).- Legisladora, ha utilizado sus cinco minutos. Le ruego que vaya redondeando.

Sra. Vilches.- No los conté, pero no creo que hayan sido cinco minutos.

De todas maneras, a lo que quiero referirme y, si me permiten, terminar, es que lo que ha ocurrido acá es un crimen social.

No sé a qué aluden las risas. Sigo entonces, si es que me permiten terminar: acá tenemos que hablar que esto ha sido un crimen social. No entiendo a qué aluden las risas porque ha sido bastante trágico y ustedes son responsables, señores

De todas maneras, a lo que quería referirme –y si me permiten terminar- es que debemos decir que lo que ha ocurrido es un crimen social. No comprendo la razón de las risas por parte de los legisladores porque lo que está ocurriendo es trágico y ustedes, señores, son responsables.

Tenemos que hablar de un crimen social porque hay responsables políticos, porque cuando hay familias que pierden la vida, que pierden todo y cuando las leyes que se aprueban garantizan este enorme negociado, hay responsabilidades concretas.

¿Los 150 millones de pesos destinados a la ayuda serán suficientes? ¿Quién los administrará? Todavía hay personas que sufrieron daños por la explosión en Alta Córdoba que no han recibido ayuda y que aún no se han reconstruido sus viviendas.

Entonces, sabiendo que se va a rechazar la moción de reconsideración para el tratamiento de este tema, pedimos que se le dé curso al tratamiento en comisión de este proyecto de ley de declaración de emergencia ambiental que hemos presentado.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente 16189/L/15, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 18 de febrero de 2015.

Al señor
Presidente Provisorio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a los fines de solicitar, en los términos del Art. 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 16189/L/15, proyecto de declaración de mi autoría.

El proyecto solicita a los legisladores nacionales por la Provincia de Córdoba exijan la apertura de todos los archivos secretos para el inmediato esclarecimiento del atentado a la AMIA, que se encontraba bajo la investigación del Fiscal Alberto Nisman, cuya muerte ha motivado la organización de una marcha por parte de sus colegas.

Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: más que pedir la reconsideración de la votación quiero dejar sentado el posicionamiento político porque no puedo más que diferir completamente con las palabras vertidas por la legisladora Chiofalo, quien ha tenido considerables minutos para dejar sentada su opinión sobre distintos temas.

Quiero plantear que no adherimos a la marcha convocada por este sector de fiscales a los que se ha plegado la oposición patronal porque se trata de una marcha convocada por fiscales acusados de haber sido encubridores de la causa AMIA, por lo que nos parece totalmente cínico que ellos sean quienes pidan “verdad y Justicia”.

También nos parece cínico que esta marcha esté acompañada “espiritualmente” por el Gobernador de esta Provincia; por el PRO, de Mauricio Macri, acusado por escuchas ilegales junto a “Fino” Palacios; que sea acompañada por Massa, quien tiene como jefe de campaña a “Juanjo” Álvarez, ex miembro de la SIDE, y por los distintos sectores patronales que han sido tan encubridores de la causa AMIA como ahora que acompañan al fiscal Nisman.

Pero también –y aprovecho para delimitarnos porque considero que la población tiene que tener una opción distinta a la de acompañar a estos dos sectores- queremos diferenciarnos del kirchnerismo, que defenestra la marcha pero en su seno sostiene a Milani y a Berni, quien fue acusado de dirigir al oficial Galeano para hacer espionaje en las movilizaciones obreras y que también sostiene a otros genocidas y ha sostenido durante todo este tiempo a Stiuso, a quien ahora cínicamente defenestra.

Entonces, simplemente quiero dejar planteada nuestra posición de limitación clara y concreta respecto de la marcha del 18-F como del Gobierno nacional.

Entendemos que la única manera de llegar a la verdad y a la Justicia no sólo sobre la causa AMIA sino para descubrir todo el entramado detrás de la muerte de Nisman, es abriendo los archivos de la SIDE, formando una comisión investigadora independiente donde no tengan concurrencia los partidos ni los miembros de los partidos que han encubierto todos estos años el atentado a la AMIA.

Eso es lo que queremos dejar expresado para los trabajadores y para el pueblo de Córdoba que, entendemos, tiene que sostener una posición independiente.

Nada más, muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 16195, con una moción de preferencia que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 18 de febrero de 2015.

Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento con preferencia de siete días del proyecto 16195/L/15 para la 5ª sesión ordinaria del presente período legislativo en los términos dispuestos por los artículos 122 y concordantes del Reglamento Interno.

El mismo declara su preocupación por las reiteradas expresiones vertidas ante los medios masivos de comunicación por parte de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, quienes denunciaron sabotajes en los servicios de cloacas y de alumbrado público y su repudio ante la omisión de la obligación legal de denunciar impuesta por el artículo 317, inciso 1) del Código Procesal Penal de Córdoba, sembrando zozobra e inseguridad a los vecinos de la ciudad al no ser canalizado por las vías institucionales pertinentes.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Nadia Fernández
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Alfredo Altamirano a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 42.

Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos